2. Negociaciones de paz en África

- A lo largo del año 2020 se identificaron 13 procesos y negociaciones de paz en el continente africano, lo que supone el 32,5% de los 40 procesos de paz a nivel mundial.
- El contexto de crónico bloqueo y parálisis de la vía diplomática para abordar la cuestión del Sáhara Occidental favoreció una escalada de la tensión a finales de año.
- Al finalizar 2020 las partes en conflicto en Libia suscribieron un acuerdo de alto el fuego y las negociaciones políticas intentaban establecer un gobierno de transición, pero persistían las dudas sobre la evolución general del proceso.
- En Mozambique el Gobierno y RENAMO avanzaron en la implementación del programa de DDR previsto en el acuerdo de paz de 2019.
- Se celebraron las primeras conversaciones directas entre el Gobierno de Camerún y una parte del movimiento secesionista liderada por el histórico líder Sisiku Julius Ayuk Tabe para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego.
- En Sudán el Gobierno y la coalición rebelde SRF y el SLM/A-MM firmaron un histórico acuerdo de paz que no fue respaldado por otros grupos rebeldes como el SPLM-N al-Hilu y el SLM/A-AW.
- En Sudán del Sur se conformó el gobierno de transición y se llevaron a cabo conversaciones de paz con los grupos armados no signatarios del acuerdo de paz de 2018.

Este capítulo analiza los procesos y negociaciones de paz en África en 2020. En primer lugar, se examinan las características y tendencias generales de los procesos de paz en la región y, en segundo lugar, se profundiza en la evolución de cada uno de los casos durante el año, incluyendo referencias a la agenda de género, paz y seguridad. Al inicio del capítulo se incluye un mapa en el que se identifican los países del continente africano que fueron escenario de negociaciones durante 2020.

Tabla 2.1. **Resumen de los procesos y las negociaciones de paz en África en 2020**

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
Burundi[1]	Gobierno, oposición política y social agrupada en el Conseil National pour le respect de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et la Restauration d'un Etat de Droit (CNARED)	--
Camerún (Ambazonia/ North West y South West)	Gobierno, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku)	Iglesia, organizaciones de la sociedad civil, Suiza, Centre for Humanitarian Dialogue
Eritrea – Etiopía	Gobierno de Eritrea y Gobierno de Etiopía	Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, EEUU
Libia	Consejo Presidencial y Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), Cámara de Representantes (CdR), Congreso General Nacional (CGN), LNA o ALAF	Cuarteto (ONU, Liga Árabe, UA, UE), Alemania, Francia, Italia, Rusia,Turquía, Egipto, Marruecos, Túnez, Holanda y Suiza, entre otros países; Centre for Humanitarian Dialogue
Malí	Gobierno, Coordinadora Movimientos de Azawad (CMA) –MNLA, MAA y HCUA–, Plataforma –GATIA, CMFPR, CPA, facción del MAA	Argelia, Francia, Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), UA, ONU, UE, Centre for Humanitarian Dialogue, Carter Center, organizaciones de la sociedad civil, Mauritania
Marruecos – Sáhara Occidental	Marruecos, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO)	ONU, Argelia y Mauritania, Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia)
Mozambique	Gobierno, RENAMO	Equipo mediador nacional, Comunidad de Sant'Egidio, Iglesia Católica, ONU, Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), UA, UE, Botswana, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Tanzania
RCA	Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias anti balaka	Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (UA y CEEAC con apoyo de la ONU, CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad), Comunidad de Sant'Egidio, ACCORD, OCI, Grupo de Apoyo Internacional (ONU, UE, entre otros), Centre for Humanitarian Dialogue, China, Rusia, Sudán

1. La Comunidad de Estados de África del Este (EAC por sus siglas en inglés) finalizó su facilitación en 2019.

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
RDC	Gobierno liderado por Cap pour le Changement (coalición liderada por Félix Tshisekedi), en coalición con el Front Commun pour le Congo (coalición liderada por Joseph Kabila, sucesora de la Alianza por la Mayoría Presidencial), oposición política y social, grupos armados del este del país	Conferencia Episcopal Congolesa (CENCO), Iglesia de Cristo en el Congo, Angola, Tanzania, Uganda, Grupo de Apoyo a la Facilitación del Diálogo Nacional sobre la RDC liderada por la UA, SADC, Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), UA, UE, ONU, OIF y EEUU
Somalia	Gobierno Federal, líderes de los estados federales y emergentes (Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste), movimiento político-militar Ahlu Sunna Wal-Jama'a, líderes de clanes y subclanes, Somalilandia	ONU, IGAD, Turquía, entre otros
Sudán	Gobierno de Sudán, Frente Revolucionario de Sudán (SRF, coalición que aglutina a grupos armados de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur), Movimiento por la Justicia y la Equidad (JEM), Movimientos de Liberación de Sudán, facciones SLA-MM y SLA-AW, Sudan People's Liberation Movement-North (SPLM-N) facciones Malik Agar y Abdelaziz al-Hilu	African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP), Troika (EEUU, Reino Unido, Noruega), Alemania, UA, UNAMID, Etiopía, Sudán del Sur, Uganda
Sudán del Sur	Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition (SPLM/A-IO), una serie de grupos menores (SSOA, SPLM-FD, entre otros) y SSOMA (NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC)	"IGAD Plus": IGAD, que integra a Sudán, Sudán del Sur, Kenia, Etiopía, Eritrea, Yibuti, Somalia y Uganda; UA (Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), UE, ONU, South Sudan Council of Churches, Comunidad de Sant'Egidio
Sudán - Sudán del Sur	Gobierno de Sudán y Gobierno de Sudán del Sur	IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), Egipto, Libia, EEUU, UE

2.1 Negociaciones en 2020: tendencias regionales

A lo largo del año 2020 se identificaron **13 procesos y negociaciones de paz en el continente africano**, lo que supone el 32,5% de los 40 procesos de paz identificados a nivel mundial. Esta cifra es inferior a la del año 2019, con 19 procesos de paz, y a la del 2018, cuando tuvieron lugar 22 procesos de paz. La reducción de 2020 respecto a 2019, se debe a que algunos contextos profundizaron en la implementación de los acuerdos de paz alcanzados previamente y han dejado de analizarse en el anuario: República del Congo, Etiopía (Ogadén) y Etiopía (Oromiya). En otros casos no se identificaron negociaciones de paz en vigor: Nigeria (Delta del Níger), región Lago Chad (Boko Haram) y Senegal (Casamance).

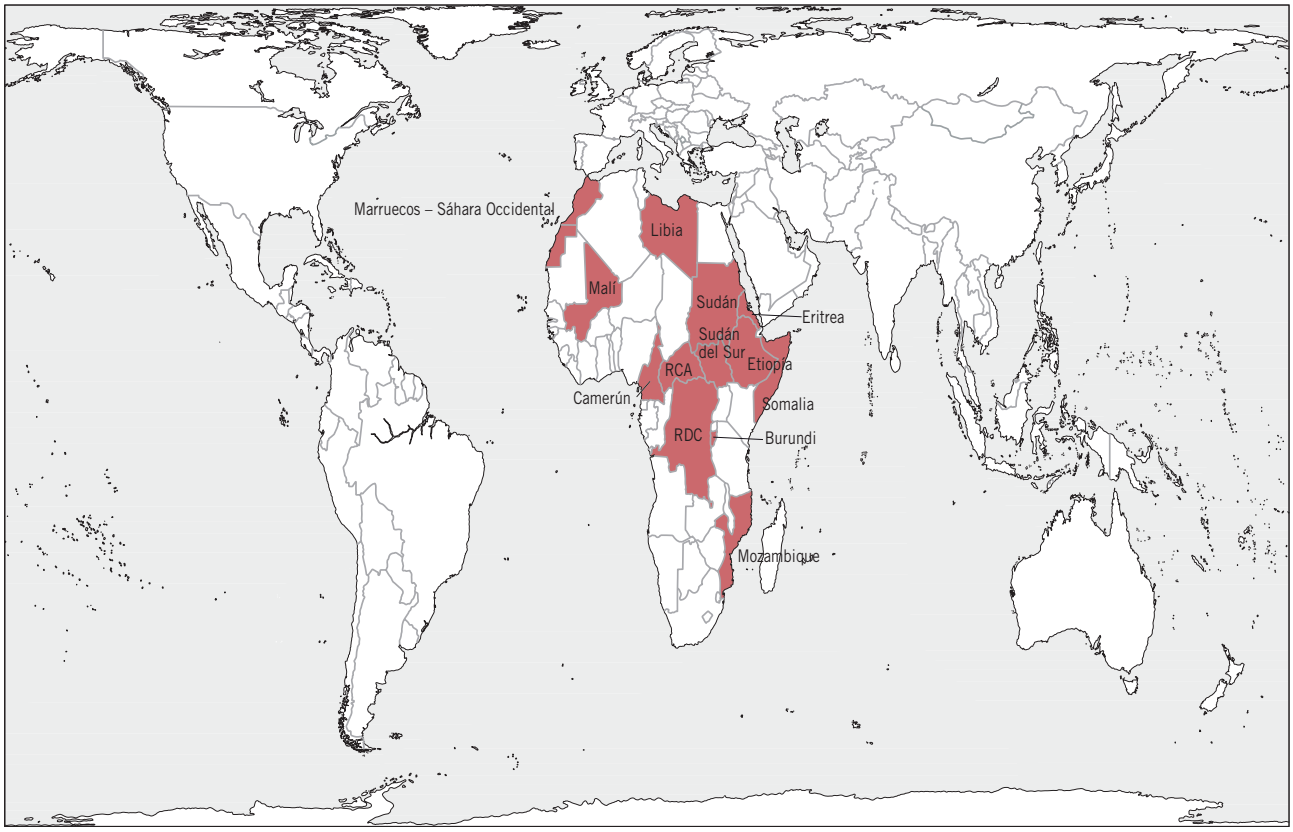
La expansión de la pandemia de la COVID-19 afectó negativamente a los procesos de paz en el continente africano

Nueve de estas 13 negociaciones de paz estaban vinculadas a situaciones de conflicto armado: los casos de Burundi, Camerún (Ambazonia/North West y South West), Libia, Malí, RCA, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Los cuatro procesos restantes estuvieron relacionados con contextos de tensión: Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, Mozambique y Sudán-Sudán del Sur. Los conflictos armados en el continente africano continuaron afectando gravemente a la población civil a pesar del llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, realizado en marzo, y las misiones de mantenimiento de la paz y la respuesta humanitaria se vieron afectadas por la pandemia de la COVID-19, tal y como señaló un informe de la OCDE.[2] De hecho, el virus creó obstáculos importantes para quienes trabajan por la paz, ya que las misiones diplomáticas se redujeron a su personal esencial, los enviados especiales de la ONU interrumpieron sus viajes y las iniciativas de mediación se detuvieron en respuesta a la COVID-19, tal y como destacó la organización. Para los actores vinculados a la diplomacia en contextos de conflicto en el continente, la expansión del virus significó un desafío fundamental en lo concerniente al acceso.[3] Como resultado, tal y como destacó el comisionado de paz y seguridad de la Unión Africana (UA) , Smail Chergui, la COVID-19 claramente contribuyó al retraso en la implementación de acuerdos de paz críticos.[4]

En relación con los actores involucrados en la negociación, en el año 2020 **solo dos casos involucraron exclusivamente a los gobiernos de los respectivos países y a grupos armados o movimientos político-militares en las negociaciones**. Fueron los contextos de Mozambique –entre el Gobierno y el grupo opositor RENAMO–, y RCA –entre el Gobierno y los diferentes integrantes de la antigua coalición Séléka y las milicias anti balaka. **Mientras siete de los 13 procesos de paz se caracterizaron por un mapa de actores más complejo, con Gobiernos, grupos armados y actores opositores políticos y sociales.** Se constató en procesos como Camerún (Ambazonia/North West y South

2. OCDE, *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), COVID-19, crises and fragility*, París, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 29 de abril de 2020.
3. Mustasilta, K., *From Bad to Worse? The impact(s) of Covid-19 on conflict dynamics*, Institute for Security Studies, Conflict Series Brief 13, 11 de junio de 2020.
4. Chergui, S., "OpED: Peace and Security amidst COVID-19", AU, 17 de abril de 2020.

Mapa 2.1. **Negociaciones de paz en 2020 en África**



Países con procesos y las negociaciones de paz en África en 2020

West) –donde los contactos han implicado a actores políticos vinculados a insurgencias–, Malí –donde el proceso negociador ha involucrado en los últimos años a las autoridades nacionales y a numerosos actores políticos y armados de la región de Azawad (norte)–, Libia –entre actores políticos y militares que controlan distintas zonas del país–, Somalia –entre el Gobierno federal, los liderazgos de los estados federales y otros actores políticos y militares del país–, Sudán –entre el Gobierno, oposición política y actores insurgentes de diversas regiones del país–, Sudán del Sur –entre el Gobierno, el grupo armado SPLM/A-IO y otros grupos menores, tanto de la oposición política como armados–. y RDC –donde las negociaciones involucraron, por un lado, al Gobierno y los partidos y coaliciones de partidos opositoras y, por otro, al Gobierno y diferentes grupos armados del este del país. **En otros casos, en cambio, participaron actores gubernamentales y de la oposición política y social.** Fue el caso de Burundi –donde los contactos han involucrado al Gobierno y a sectores del CNARED. A su vez, **otros procesos negociadores estuvieron protagonizados por los gobiernos de países vecinos, en el marco de disputas internacionales**. Ejemplos de ello fueron el proceso de diálogo entre Sudán y Sudán del Sur y las negociaciones entre Eritrea y Etiopía. Un caso, el de Marruecos-Sáhara Occidental, involucra al Gobierno marroquí y al Frente POLISARIO, que proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 1976, y es considerada como una disputa internacional por tratarse de un territorio considerado por la ONU como pendiente de descolonizar.

En relación a las terceras partes implicadas en los procesos de paz en África, **todos los procesos y negociaciones analizados contaban con el apoyo de terceras partes con la excepción de Burundi,** ya que el facilitador oficial del diálogo interburundés, el ex presidente tanzano Benjamin Mkapa, anunció que renunciaba a su rol en febrero de 2019, por lo que a partir de entonces las conversaciones han sido directas entre el Gobierno y sectores del Consejo CNARED. Cabe mencionar que si bien hay muchos casos donde se conoce públicamente cuáles son los actores que desempeñan tareas de mediación, facilitación y acompañamiento, en otros contextos estas tareas se llevan a cabo de manera discreta y no pública. En todos los casos con terceras partes había más de un actor desempeñando tareas de mediación y facilitación, entre los que destaca el papel predominante de la ONU, involucrada en nueve de los 13 casos en el continente: Libia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Mozambique, RCA, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Otro actor destacado fue la UA, en el marco de su Arquitectura de Paz y Seguridad en África (APSA), que participa en ocho casos: los procesos de Libia, Malí, Mozambique, RCA, RDC, Sudán, Sudán del Sur y Sudán-Sudán del Sur.

A su vez, **organizaciones intergubernamentales regionales africanas participaron como terceras partes**, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) en Malí; la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) en los procesos de RCA y de RDC; la Comunidad Económica de Estados del

África Central (CEEAC) en el proceso negociador de RCA; la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en Mozambique; la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) en Somalia, Sudán del Sur y Sudán-Sudán del Sur. Asimismo, además de las organizaciones intergubernamentales africanas, otros organismos intergubernamentales participaron como terceras partes en el continente africano, como la UE –en Mozambique, Malí, RCA, RDC, Sudán del Sur y entre Sudán-Sudán del Sur–, o la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) –en RCA.

Por otro lado, **los Estados también tuvieron un papel destacado como terceras partes en los procesos de paz y negociaciones en África**. Un caso tenía solo terceras partes estatales: las tareas de mediación y facilitación de Arabia Saudita, EEUU y, especialmente, de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en las negociaciones entre Eritrea y Etiopía. En el resto de casos con actores mediadores estatales, numerosos Estados, tanto del continente africano como de otros continentes, se involucraron en procesos en que participaban también otros actores mediadores y facilitadores. A su vez, cabe destacar el papel como tercera parte de actores religiosos, de carácter local o internacional: la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Comunidad de Sant'Egidio (Vaticano) en RCA; la Iglesia Católica local y la Comunidad de Sant'Egidio en Mozambique; la Iglesia de Cristo en el Congo en RDC; la Anglophone General Conference (AGC), formada por los líderes católicos, protestantes y musulmanes en Camerún; y el Consejo de Iglesias de Sudán del Sur en el proceso en ese país. También destaca el papel desempeñado por organizaciones especializadas en mediación y facilitación, como el Centre for Humanitarian Dialogue, presente en contextos como Camerún, Libia, Malí o RCA.

En el marco de esa proliferación de actores mediadores, **siguió siendo frecuente, como en los últimos años, la participación de terceras partes en el marco de formatos conjuntos**, como los llamados grupos de amigos y grupos de apoyo. Fue el caso, entre otros, del Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia) en relación al proceso de diálogo entre Marruecos y el Frente POLISARIO y el Grupo de Apoyo Internacional (que incluye a la ONU y la UE) en el diálogo en RCA. Otros formatos de coordinación incluyeron IGAD Plus, que facilita el diálogo en Sudán del Sur y que está integrada por la IGAD, los cinco miembros del High-level Ad Hoc Committee de la UA –Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Chad y Argelia–, los Estados de la llamada Troika –EEUU, Reino Unido y Noruega–, la UE, la UA y la ONU. Destacó también la llamada Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación, involucrada en RCA, promovida por la UA y la CEEAC, con apoyo de la ONU, la CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad, y que a su vez coexistió con otros actores mediadores en RCA. A la vez, se siguió constatando la competencia entre terceras partes, como ejemplifica el caso de Libia, donde países como Rusia y Egipto, por un lado, y Turquía, por otro, apoyan a actores enfrentados.

Respecto a los temas de las negociaciones, estos fueron diversos. Entre ellos, destacan las medidas de **altos el fuego y ceses de hostilidades**. En diversos de los acuerdos de **cese de hostilidades firmados se produjeron violaciones del alto el fuego**, lo que pone de manifiesto la fragilidad de este aspecto en los procesos de paz y la falta de voluntad política para mantener lo acordado. En el caso de Libia, se violaron sistemáticamente los diversos altos el fuego acordados, y se produjeron persistentes vulneraciones del embargo de armas por parte de numerosos actores regionales e internacionales que apoyan a uno u otro bando. En RCA, a pesar del inicio de la implementación del acuerdo alcanzado en febrero de 2019 entre el Gobierno y los 14 grupos armados, las rupturas del alto el fuego fueron constantes.

Otro aspecto relativo al ámbito de seguridad fue la cuestión del desarme, la desmovilización y la reintegración de combatientes (DDR), presente en algunos procesos, como los de Malí, Sudán del Sur o Mozambique**,** entre otros. En **Mozambique**, tras la firma del **acuerdo de paz en 2019 entre el Gobierno y la RENAMO, durante el 2020 se puso en marcha la implementación del programa de DDR** de las fuerzas de RENAMO (alrededor de 5.000 combatientes) y el desmantelamiento de las 17 bases militares en la región central del país. Si bien durante el año se avanzó en la desmovilización, los impactos asociados a la pandemia sanitaria de la COVID-19, al igual que lo ocurrido en otros muchos procesos, impidieron el cumplimiento de las metas.

En lo concerniente a la **agenda de género, paz y seguridad,** cabe constatar la ausencia de las mujeres en los procesos de negociación y la ausencia de los temas de género en los diferentes acuerdos de paz alcanzados durante el año 2020, a excepción de Malí, aunque es destacable que en la mayoría de contextos diversos movimientos y organizaciones de mujeres estuvieron exigiendo una participación activa en los procesos de paz. En el caso de **Malí**, según el Carter Center, tanto el Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) como diversos socios internacionales han promovido activamente la participación de las mujeres en los órganos de seguimiento del acuerdo de paz. Durante las sesiones del CSA realizadas en junio y noviembre, participaron nueve mujeres (tres por cada parte signataria), lo cual representa un progreso real con respecto a la composición anterior del CSA. Sin embargo, el Carter Center señaló que aún queda pendiente la inclusión de mujeres en los cuatro subcomités y los demás órganos de ejecución, así como la creación de los Observatorios de la Mujer en las regiones norteñas. En el caso de **Libia**, las negociaciones de carácter político –conocido como LPDF por las siglas en inglés de Libyan Political Dialogue Forum– tuvieron su cita clave entre el 9 y 15 de noviembre en Túnez. Las 17 mujeres libias del total de 75 participantes en el diálogo político LPDF o "track" político, realizaron una declaración conjunta a mediados de noviembre en la que subrayaron la importancia de la implicación de las mujeres en el proceso de paz, diálogo, reconstrucción del Estado y reconciliación del país.

Asimismo cabe remarcar algunas iniciativas en diferentes países. La sociedad civil liderada por mujeres en **Camerún** ha estado a la vanguardia del desarrollo de enfoques innovadores para abordar el aumento de la violencia y promover una paz con igualdad de género. La Liga Internacional de Mujeres por la Paz (WILPF) de Camerún trabajó con organizaciones de la sociedad civil para defender la participación política plena y significativa de las mujeres, abordar el impacto de género de los crecientes desafíos de seguridad vinculados a los conflictos y aprovechar la agenda de acción de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS). En otros contextos, como **Somalia, Burundi o RCA**, aunque ausentes de los espacios formales de negociación, las mujeres exigieron su participación en los procesos electorales en marcha y, con el apoyo de ONU Mujeres y organizaciones de mujeres, consiguieron alcanzar pactos y acuerdos para garantizar y fortalecer su participación política en los próximos eventos políticos. En el Cuerno de África, el Consejo de Seguridad de la ONU continuó respaldando los esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en las actividades de mediación y prevención de conflictos, en particular mediante la **Red de Mujeres Africanas en la Prevención de Conflictos y la Mediación**. ONU Mujeres siguió prestando apoyo a la Red, que incluyó el despliegue de integrantes de la misma en Sudán del Sur, Sudán y Etiopía.

Cabe constatar la persistente ausencia de las mujeres en los procesos de negociación y de los temas de género en los diferentes acuerdos de paz en África

En vísperas del vigésimo aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, la paz y la seguridad (RCSNU 1325), se celebró el diálogo virtual titulado "20 años de participación de las mujeres africanas en la agenda de mujeres, paz y seguridad: perspectivas de la sociedad civil"[5] en el que participó Pravina Makan-Lakha, directora general y asesora sobre Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) de la organización surafricana ACCORD. El diálogo tuvo lugar el 23 de octubre de 2020 en un momento crucial en la agenda de WPS, ya que los actores de todo el mundo aprovecharon la oportunidad para hacer un balance del progreso y abordar las brechas de la agenda durante los últimos 20 años. El evento fue organizado conjuntamente por 11 organizaciones de la sociedad civil en África, entre ellas: Human Sciences Research Council; Africa Institute of South Africa; Women's International Peace Centre; Femmes Africa Solidarité (FAS); South African Women in Dialogue (SAWID); West Africa Network for Peacebuilding (WANEP); African Women in Dialogue (AWID); African Leadership Centre; Institute for Security Studies (ISS); Training for Peace (TfP); ACCORD; y finalmente, el South Africa Department of Science and Innovation. Los objetivos de la reunión fueron escuchar las voces y perspectivas de las mujeres sobre los avances y desafíos desde la adopción de la resolución 1325 y trazar nuevos caminos para las mujeres en África en el ámbito de la paz y la seguridad. La reunión se centró en cuatro temas: prevención y protección, mediación, mantenimiento de la paz y reconstrucción y consolidación de la paz después de los conflictos.

Durante el debate, Pravina Makan-Lakha se refirió al balance desigual de resultados. Por ejemplo, en el sur del continente, aunque hay un número creciente de representación femenina en los parlamentos, este progreso no se está traduciendo en realidades en la comunidad, ya que los países siguen recibiendo clasificaciones deficientes en términos del Índice de Desigualdad de Género. Para ilustrar, en enero de 2019, si bien el 46,8% del Parlamento de Sudáfrica estaba compuesto por mujeres, el país ocupó el puesto 97 en el Índice de Desigualdad de Género. Además, **en lo que respecta a la mediación en África, de los 16 acuerdos de paz firmados entre 1992 y 2011, solo dos incluyeron mujeres como signatarias y solo tres incluyeron mujeres como mediadoras principales**. Pravina Makan-Lakha agregó que, más recientemente, las mujeres de Libia, RCA, Sudán y Sudán del Sur se han enfrentado a numerosos obstáculos, así como a una resistencia abierta, a las demandas de su participación en los procesos de paz. Concluyó afirmando que aunque los números no son motivo de celebración, se debía reconocer el éxito en el establecimiento, promoción y fortalecimiento de redes de mujeres para la prevención y mediación de conflictos. No obstante, una de las conclusiones principales fue que, como muestran los datos, todavía hay mucho camino por recorrer antes de poder afirmar que se han logrado los objetivos.

Respecto a la evolución de las negociaciones de paz, durante 2020 se continuó asistiendo a avances positivos en Mozambique, Sudán, entre Sudán y Sudán del Sur y en Sudán del Sur. En **Mozambique,** la implementación del acuerdo de paz de 2019 inició durante 2020 con la puesta en marcha del programa de DDR, si bien no se logró el objetivo previsto de desmantelar todas las bases militares de la RENAMO (17) para agosto de 2020. A mediados de junio, el enviado especial de la ONU para Mozambique, Mirko Manzoni, anunció la desmovilización de unos 300 combatientes y el desmantelamiento de la primera base militar en Savane, distrito de Dondo, provincia de Sofala. Este hecho fue recibido como un paso importante en la construcción de la confianza entre las partes, facilitando el camino y las expectativas para que el resto de combatientes, así como las 16 bases militares de RENAMO, se cierren progresivamente. Durante el tercer trimestre del año se informó de que aproximadamente 500 ex combatientes se habían desmovilizado, lo cual supone un 10% de los 5.000 previstos. Los desacuerdos iniciales entre las partes, así como el inicio de la crisis sanitaria global

5. Hamilton, Molly, "ACCORD highlights the urgency of increasing women's participation in mediation 20 years after UNSCR 1325", ACCORD, 2 de noviembre de 2020.

por la pandemia del coronavirus y las medidas de contención en el país, dificultaron la implementación de las cláusulas del acuerdo de paz. Según la ONG surafricana ACCORD, los niveles y las características de la transmisión comunitaria de la COVID-19 en el país exigieron la puesta en marcha de importantes medidas de contención por parte del Gobierno, que afectaron el proceso de desmilitarización de diferentes maneras.

En otro ejemplo de evolución positiva, en **Sudán**, tras un año de negociaciones de paz desarrolladas en la capital de Sudán del Sur, Juba, **el Gobierno sudanés y la coalición rebelde Frente Revolucionario Sudanés (SRF) y la facción del Movimiento de Liberación de Sudán liderada por Minni Minnawi (SLM/A-MM) firmaron el 31 de agosto un histórico acuerdo de paz**. Si bien el acuerdo significa un paso fundamental para la consecución de la paz en el país, este no logró la firma de todos los actores armados. La facción del grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte encabezada por Abdelaziz al-Hilu (SPLM-N) y la facción del Movimiento de Liberación de Sudán encabezada por Abdel Wahid al-Nur (SLM/A-AW) se negaron a ratificar el pacto. Sin embargo, el Gobierno mantiene las conversaciones separadas con los dos grupos no signatarios, invitándoles a que se sumen al acuerdo. Del mismo modo, en la vecina **Sudán del Sur**, el año también mostró un avance en la implementación de algunas de las cláusulas establecidas en el Acuerdo de Paz de Sudán del Sur de 2018 (R-ARCSS), así como en lo relativo a las negociaciones de paz con actores no signatarios del pacto. En relación a las primeras, destacó la **conformación del ansiado gobierno de unidad y el acuerdo sobre la distribución administrativa-territorial,** puntos que representaban el principal escollo para la implementación del acuerdo. De forma paralela, se puso en marcha un nuevo proceso de negociación de paz con los grupos armados no signatarios del acuerdo de paz, articulados a través de la **Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA),** si bien las tensiones internas en la Alianza hicieron más complejas las negociaciones. Por último, en lo concerniente al proceso de paz entre **Sudán y Sudán del Sur,** durante el año se mantuvo la dinámica de acercamiento entre ambos Gobiernos iniciada en 2019 tras la conformación del nuevo Ejecutivo sudanés, lográndose avances en las relaciones diplomáticas entre los dos países, así como en lo referente a las delimitaciones fronterizas. Entre los hechos destacados del año, resaltó el papel de mediador desarrollado por las autoridades de Sudán del Sur en el proceso de negociación de paz de Sudán, que condujo a la firma en agosto de 2020 del acuerdo de paz en Juba. También resultó significativo el acuerdo logrado entre ambos países en septiembre para formar un comité técnico conjunto con el objetivo de reanudar la producción de petróleo en el estado de Unidad y en otros yacimientos petrolíferos clave. A su vez, a finales de octubre, los Gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo conjunto de cooperación militar y de defensa.

Los avances de las negociaciones en Sudán contribuyeron a la evolución positiva de las negociaciones entre Sudán y Sudán del Sur

En contraste, **otros procesos afrontaron numerosos obstáculos y dificultades durante el año** (Burundi, Camerún, Malí, Libia, RCA, RDC y Somalia). En **Burundi**, el fracaso de las iniciativas regionales para promover el diálogo político inclusivo y las divisiones en el seno de la coalición opositora burundesa condujeron a una serie de contactos entre representantes del Gobierno y algunos de estos líderes opositores que acabaron con el regreso de estos a Burundi, aunque este acuerdo no tuvo consecuencias sobre el terreno, ya que la situación de violencia e inseguridad, así como la represión de la oposición política, continuó de cara a las elecciones celebradas en mayo. En **Camerún**, tras tres años del inicio del conflicto armado, el 2 de julio se celebraron las primeras conversaciones entre el Gobierno y una parte del movimiento separatista liderada por el histórico líder Sisiku Julius Ayuk Tabe, para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Si bien numerosos actores locales e internacionales, así como importantes sectores de la sociedad civil camerunesa celebraron el encuentro, las conversaciones fueron rechazadas por otros sectores separatistas en Camerún y en el extranjero –ya que el movimiento secesionista se encuentra fragmentado en diversas facciones– y en el seno del Gobierno también se observaron divisiones en torno a la iniciativa de paz. En **Malí,** durante el año se produjeron muy pocos avances en la implementación del Acuerdo de Paz de Argel de 2015 debido a los efectos de la crisis de la COVID-19, así como a la crisis sociopolítica padecida en el país que dio lugar a un golpe de Estado y al establecimiento de un Gobierno transicional. En **Libia**, los intentos por promover una salida negociada al conflicto continuaron enfrentando dificultades a lo largo de 2020, en parte como consecuencia de la creciente implicación de actores regionales e internacionales en la contienda –actores que intentaban incidir en las negociaciones mientras, paralelamente, continuaban suministrando armas a uno u otro bando, en abierto desafío al embargo de armas impuesto por la ONU. No fue hasta la segunda mitad del año que se produjeron algunos avances, aunque al finalizar 2020 persistían múltiples dudas sobre la evolución del proceso. En **RCA**, la implementación del Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de 2019 fue problemática, ya que varios grupos armados continuaron violando el acuerdo y obstruyendo la restauración de la autoridad gubernamental, lo que entorpeció los preparativos de las elecciones generales del 27 de diciembre. Además, se produjo un resurgimiento de la violencia en el país. En **RDC**, el Gobierno de coalición surgido de las controvertidas elecciones de 2018 y liderado por Félix Tshisekedi, se vio afectado por numerosas tensiones y obstáculos que le condujeron a la ruptura a finales de 2020. En **Somalia**, diversas voces hicieron llamamientos al diálogo entre el Gobierno Federal y al-Shabaab, aunque no trascendieron contactos. Además, las tensiones entre el Gobierno Federal y los estados federados de cara a la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales entre diciembre de 2020 y febrero de

2021, fueron en aumento durante el año, aunque en septiembre se alcanzó un acuerdo de cara a avanzar en el proceso electoral, desbloqueando una situación de *impasse* que amenazaba con retrasar la cita más allá del límite constitucional del gobierno actual, lo que hubiera añadido más incertidumbre y tensión a la situación.

También **cabe destacar que hubo procesos totalmente estancados durante el año, como fueron las negociaciones entre Eritrea-Etiopía y Marruecos-Sáhara Occidental.** En el caso de **Eritrea y Etiopía**, dos años después de la firma del histórico acuerdo de paz entre ambos Estados, el proceso de implementación del acuerdo siguió estancado como consecuencia de la escalada de la tensión y el inicio del conflicto armado entre el Gobierno etíope y el estado regional de Tigray. A pesar de que se habían realizado avances positivos en algunas áreas, otras siguieron totalmente paralizadas como consecuencia de las tensiones y la guerra iniciada en noviembre en Tigray, a lo que se suma la animosidad no resuelta entre Tigray y los líderes eritreos. En lo concerniente al conflicto en torno a**l Sáhara Occidental**, continuó caracterizándose por un crónico bloqueo y parálisis de la vía diplomática para abordar y resolver la disputa, situación que favoreció una escalada de la tensión hacia finales de año.

Finalmente, un último aspecto significativo a resaltar fue la **apertura** de algunos actores estatales en distintos escenarios de conflictividad armada a **explorar espacios de diálogo con actores armados de línea yihadista.** En **Mozambique**, el Gobierno presidido por Filipe Nyusi, si bien había descartado en enero iniciar conversaciones con los rebeldes en la región de Cabo Delgado, anunció posteriormente la predisposición del Ejecutivo a entablar conversaciones de paz. Del mismo modo, en **Malí**, el Gobierno abrió la puerta a iniciar negociaciones de paz con algunos grupos con agendas yihadistas no signatarios del Acuerdo de Paz de Argel, sobre todo con los líderes Amadou Kouffa (Frente de Liberación de Macina) e Iyad ag Ghaly (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –JNIM o GSIM–). Este hecho permitió posteriormente un acuerdo entre el JNIM y el Gobierno para el intercambio de prisioneros, hecho que fue saludado por el Comisionado de Paz y Seguridad de la UA, Smail Chergui, y por el secretario general de la ONU, António Guterres, expresando también su apertura al diálogo con militantes yihadistas en el Sahel. También el Gobierno de Francia, reacio a entablar negociaciones con estos actores, al finalizar el año abrió la posibilidad de dialogar con una contraparte que fuera "representativa y legítima", palabras que fueron interpretadas como una alusión al JNIM. Este debate también estuvo presente en relación a **Somalia**, donde cargos de las Fuerzas Armadas de Kenia que han participado en AMISOM señalaron que era necesario un cambio de estrategia en la guerra en el país vecino, ya que las acciones militares se estaban demostrando inefectivas. Diversos analistas destacaron que la estrategia securitizadora estadounidense y de la comunidad internacional en su conjunto, con el beneplácito del Gobierno somalí, se ha revelado como un fracaso porque no ha reducido el impacto de las actividades de al-Shabaab y ha causado numerosas víctimas civiles. En este sentido, han surgido diversas voces reclamando una aproximación a al-Shabaab para promover un proceso de negociación similar al que se ha celebrado en Afganistán entre EEUU y los talibanes. Sin embargo, hay división de opiniones entre voces expertas sobre la posibilidad efectiva de que se pueda desarrollar un proceso de diálogo en la actualidad. El cambio de posición de los diferentes actores que intervienen en estos conflictos armados reflejó la necesidad de involucrar a todos los actores armados en el diálogo para frenar la violencia, independientemente de sus creencias ideológicas.

2.2 Análisis de casos

África Austral

Mozambique	
Actores negociadores	Gobierno, RENAMO
Terceras partes	Equipo mediador nacional, Comunidad de Sant'Egidio (Vaticano), Iglesia Católica, ONU, Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), UA, UE, Botswana, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Tanzania
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz de Roma (1992), Acuerdo de Paz y Reconciliación de Maputo (2019)

Síntesis:
El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), apoyado por las minorías blancas gobernantes en la antigua Rhodesia (hoy Zimbabwe) y la Sudáfrica del apartheid, en el contexto de la Guerra Fría. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de una guerra que causó un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados. El acuerdo dio paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico, aunque con elevados niveles de desigualdad. En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas de un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de cambios, principalmente una profundización de la descentralización y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992, hecho que finalmente ocurrió, desatando la vuelta a los enfrentamientos armados en abril de 2013 y la posterior apertura de un nuevo proceso de negociación de paz acordado en agosto de 2014. La declaración de una tregua en 2016 por parte de RENAMO y los avances del proceso de paz durante 2017 provocaron una reducción ostensible de las acciones bélicas, llegando a la firma de un nuevo acuerdo de paz en agosto de 2019, aunque han persistido los enfrentamientos esporádicos.

La implementación del acuerdo de paz de 2019 inició durante 2020 con la puesta en marcha del programa de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes (DDR), si bien no se logró el objetivo previsto de desmantelar todas las bases militares de la RENAMO para agosto 2020. Uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz firmado en agosto de 2019 entre el Gobierno y la RENAMO, conocido como Acuerdo de Paz y Reconciliación de Maputo, versa en torno al programa de DDR de las fuerzas de RENAMO (alrededor de 5.000 combatientes) y el desmantelamiento de las 17 bases militares en la región central del país. El programa se inició con un significativo retraso según el calendario previsto, y no fue hasta el mes de abril cuando el presidente, Filipe Nyusi, y el líder de la RENAMO, Ossufo Momade, anunciaron la reanudación del programa. A mediados de junio, el enviado especial de la ONU para Mozambique, Mirko Manzoni, anunció la desmovilización de unos 300 combatientes y el desmantelamiento de la primera base militar en Savane, distrito de Dondo, provincia de Sofala. Este hecho fue recibido como un paso importante en la construcción de la confianza entre las partes, facilitando el camino y las expectativas para que el resto de combatientes, así como las 16 bases militares de RENAMO, se desmovilicen y cierren progresivamente. Durante el tercer trimestre del año se informó de que aproximadamente 500 ex combatientes se habían desmovilizados, lo cual supone un 10% de los 5.000 previstos. Los desacuerdos iniciales entre las partes, así como el inicio de la crisis sanitaria global por la pandemia del coronavirus y las medidas de contención en el país, dificultaron la implementación de las cláusulas del acuerdo de paz. Según la ONG surafricana ACCORD, los niveles y las características de la transmisión comunitaria de la COVID-19 en el país exigieron la puesta en marcha de importantes medidas de contención por parte del Gobierno, que afectaron el proceso de desmilitarización de diferentes maneras: reduciendo la capacidad de movilidad de los miembros del equipo técnico encargados de implementar el proceso de DDR; impidiendo el desarrollo de sesiones amplias debido al distanciamiento social y la prohibición de realizar reuniones de más de 20 personas; inhibiendo algunas prácticas sociales, como por ejemplo la recepción comunitaria a excombatientes, lo cual dificulta la reintegración; entre otros elementos. Esta realidad generó una extensión del calendario previsto, con un impacto en el aumento de los costes logísticos del programa, ya que, por ejemplo, los combatientes de la RENAMO tendrán que pasar más tiempo en las bases de acantonamiento, por lo que se requerirá nuevos fondos por parte del Gobierno y la comunidad internacional.

Por otro lado, el sector disidente de la RENAMO, autodenominado Junta Militar de RENAMO (JMR), que se negó a reconocer el acuerdo de paz de agosto de 2019, prosiguió con sus acciones armadas en la región central del país, lo cual significó una nueva complicación para la implementación de la paz. El 19 de marzo, Mariano Nhongo, líder de la disidencia, amenazó con incrementar las acciones armadas si el Gobierno se negaba a acceder a sus demandas. Mirko Manzoni, enviado especial de la ONU, anunció el 5 de junio su intención de reunirse con Nhongo para iniciar conversaciones de paz, sin embargo, días después, el 19 de junio, informó que los intentos de negociar habían fracasado. Posteriormente, el 24 de octubre, el Gobierno anunció un alto el fuego unilateral de una semana en las provincias de Sofala y Manica –las zonas afectadas por la violencia– en un intento de impulsar las conversaciones de paz. Nhongo anunció que estaba dispuesto a negociar con Nyusi pero no con el líder de RENAMO, Ossufo Momade. Sin embargo, nuevamente el intento de negociación fracasó. Nhongo denunció violaciones del alto el fuego y el acoso de sus combatientes por parte de las fuerzas gubernamentales. A finales de año, los ataques en la zona central provocaron al menos 30 personas asesinadas, principalmente debido a emboscadas realizadas en las carreteras de la zona. La RENAMO se desmarcó de las acciones violentas por parte del grupo disidente, reafirmando su compromiso con el acuerdo de paz. El 23 de diciembre, Nhongo anunció un alto el fuego unilateral de la JMR, prometiendo negociar con el Gobierno.

De forma paralela, en relación a la violencia en la provincia de Cabo Delgado, en el norte del país,[6] el Gobierno presidido por Nyusi había descartado en enero iniciar conversaciones con los rebeldes, sin embargo, el 12 de febrero anunció que estaba dispuesto a entablar conversaciones de paz. Si bien no hay constancia de que estas se produjeron durante el año, el Gobierno anunció en agosto que la solución al conflicto armado en Cabo Delgado no pasaba solo por una respuesta militar, informando de la creación de un nuevo organismo de desarrollo económico para la provincia norteña: la Agencia de Desarrollo Integrado del Norte (ADIN). Entre sus funciones principales el Gobierno destacó la facilitación de ayuda humanitaria, la promoción del desarrollo económico y la promoción del empleo juvenil, a fin de evitar su reclutamiento por los grupos armados que operan en la región.

África Occidental

Camerún (Ambazonia/North West y South West)	
Actores negociadores	Gobierno, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku)
Terceras partes	Iglesia, organizaciones de la sociedad civil, Suiza, Centre for Humanitarian Dialogue
Acuerdos relevantes	Declaración de Buea (1993, AAC1), Diálogo Nacional (30 septiembre-4 de octubre, 2019)

6. Véase el resumen sobre Mozambique (norte) en el capítulo 1 (Conflictos armados) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* Barcelona: Icaria, 2021.

Síntesis:
Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de North West y South West) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. En 1972 se celebró un referéndum en el que se adoptó una nueva Constitución que sustituyó el Estado federal por un Estado unitario y que también concedió más poderes al presidente, por lo que la parte sur del Camerún británico (conocida como Southern Cameroons) perdió su autonomía y fue transformada en las dos provincias actuales, North West y South West. En 1993 representantes de los grupos anglófonos celebraron un primer proceso de diálogo en Buea, la All Anglophone Conference (AAC1), de la que surgió la Declaración de Buea (que exigía reformas constitucionales para restaurar la federación de 1961). En 1994 se celebró la AAC2 en Bamenda, que concluyó que si no se restauraba el Estado federal, Southern Cameroons declararía la independencia. El conflicto, iniciado por cuestiones sectoriales en 2016, se agravó a finales de 2017. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para proclamar la independencia. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes. La represión gubernamental a las demandas de una mayoría de la población de la región que exigía un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región, ha comportado una escalada de la violencia y la demanda de soluciones negociadas al conflicto. En julio de 2018, los líderes religiosos de la comunidad anglófona (musulmanes, protestantes y católicos) anunciaron un plan para celebrar una conferencia general anglófona (la que sería la AAC3) pero por el momento no ha tenido lugar. En junio de 2019 una parte de la oposición separatista, liderada por la coalición ACT, se reunió con representantes del Gobierno en Suiza bajo los auspicios de HD, con el rechazo del principal movimiento político-militar, el AGovC. En octubre de 2019 el Gobierno de Paul Biya llevó a cabo el Diálogo Nacional sin la presencia del movimiento secesionista. Ninguna de las iniciativas hasta la fecha ha conseguido avances sustantivos.

Tras tres años de un elevado clima de violencia y graves vulneraciones de los derechos humanos como consecuencia del conflicto armado que afecta las dos regiones de mayoría anglófona del Camerún, el 2 de julio se celebraron las primeras conversaciones entre el Gobierno y una parte del movimiento separatista liderada por el histórico líder Sisiku Julius Ayuk Tabe para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Numerosos actores locales e internacionales, así como importantes sectores de la sociedad civil camerunesa celebraron el encuentro. Sisiku, junto con otros nueve líderes separatistas, participaron en las conversaciones, en respuesta al llamamiento realizado por el secretario general de la ONU, António Guterres, en marzo para un alto el fuego global durante el transcurso de la pandemia de coronavirus. La delegación del Gobierno estuvo encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia cameruneses, Léopold Maxime Eko Eko, y formada por cargos de presidencia y de la oficina del primer ministro, Joseph Ngute. Sin embargo, las conversaciones fueron rechazadas por otros sectores separatistas en Camerún y en el extranjero ya que el movimiento secesionista se encuentra fragmentado en diversas facciones, entre las cuales algunas no reconocen el liderazgo de Sisiku, y argumentaron que este no tenía un mandato para negociar. Posteriormente el Gobierno no hizo declaraciones sobre el encuentro y el secretario de presidencia del Gobierno, Ferdinand Ngoh Ngoh, desmintió informaciones realizadas por el movimiento secesionista, lo que pone de manifiesto las tensiones en el seno del Gobierno en torno a la iniciativa de paz.

Las fuerzas secesionistas representan entre 2.000 y 4.000 combatientes, y se dividen en dos Gobiernos interinos rivales, conocidos como los Interim Government (IG. Uno está liderado por Sisiku, actualmente en prisión condenado a cadena perpetua por terrorismo, y el segundo está liderado por Samuel Ikome Sako, un pastor con base en Maryland, EEUU. El IG Sisiku es considerado localmente como el más fuerte de los dos sectores.[7] La división se produjo tras el arresto en Nigeria de Sisiku junto a otros altos cargos, los llamados Nera 10 (por el hotel donde fueron detenidos) y su posterior extradición a Camerún en enero de 2018. Sisiku era el presidente del IG, pero tras su arresto Sako fue escogido nuevo presidente del IG. Este paso fue condenado por muchos sectores y calificado de poco transparente. En 2019 se produjeron conversaciones de paz en Suiza entre el Gobierno y líderes separatistas en el exilio vinculados al sector de Sako, pero estas conversaciones fueron descalificadas por Sisiku y no tuvieron resultados tangibles en el terreno.[8] Las fricciones entre ambos sectores, con base en su mayoría en la diáspora, se están trasladando a Camerún, y una de las cuestiones relevantes era qué control real tenía el liderazgo en la diáspora sobre sus combatientes en el terreno. Tras el diálogo nacional celebrado en octubre de 2019, en enero el Gobierno anunció un nuevo Estatuto Especial para las regiones anglófonas, de lo que se derivó la creación de más cuerpos legislativos regionales, pero este paso tampoco implicó cambios sustanciales y en consecuencia no tuvo consecuencias en el terreno, por lo que continuaron los enfrentamientos y las acciones de contrainsurgencia por parte de los cuerpos de seguridad.

7. Bone, R. Maxwell, "Ahead of peace talks, a who's who of Cameroon's separatist movements", *The New Humanitarian*, 8 de julio de 2020.
8. Véase la edición anterior de este informe.

Las tres rondas de conversaciones entre el Gobierno y el sector de Sisiku, la última publicitada del 2 de julio, se celebraron fuera de la prisión central de Kondengui, donde se encuentra recluido Sisiku, y fueron consideradas medidas de construcción de la confianza. El primer contacto secreto tuvo lugar en Ghana entre Eko Eko y figuras secesionistas de la diáspora como Ebenezer Akwanga y Herbert Boh. La segunda reunión tuvo lugar el 13 de abril en el centro episcopal de Mvolyé, en Yaoundé, facilitado por la Iglesia Católica, vista como neutral, en la que participó Sisiku Ayuk Tabe.[9] La tercera ronda tuvo lugar en Mvolyé. Las demandas planteadas incluyeron la desmilitarización de las regiones anglófonas (concentración de las Fuerzas Armadas en sus barracones, para que la seguridad de las dos regiones fuera responsabilidad absoluta de la policía y la gendarmería), la liberación de prisioneros y una amnistía para permitir el retorno de los líderes en el exilio. Ayaba, el jefe de AGovC, indicó que cumpliría con un alto el fuego si el Gobierno lo aceptaba. Según analistas, las conversaciones podrían ser el reflejo del cansancio de la población tras tres años de conflicto, así como de la presión de la comunidad internacional, que han empujado, respectivamente, al movimiento secesionista y al Gobierno a las conversaciones. En un comunicado dirigido a la insurgencia secesionista, el liderazgo político secesionista destacó que "ninguna guerra se ha ganado solamente en el campo de batalla, y que la paz y la independencia reales y sostenibles son producto de la mesa de negociaciones". Sin embargo, las conversaciones de paz se estancaron debido a una lucha de poder entre el primer ministro Ngute y el secretario de presidencia Ferdinand Ngoh Ngoh.[10] Ngute habría excluido a Ngoh Ngoh de las conversaciones, a pesar de haber sido él el que había liderado los contactos de la vía suiza. Tras la reunión de Mvolyé, Ngoh Ngoh habría negado la veracidad de estas conversaciones y reactivado la vía suiza. El 2 de agosto una delegación suiza encabezada por el diplomático y antiguo embajador suizo en Georgia, Günter Bächler, se reunió en Yaoundé con actores políticos vinculados al movimiento separatista, y otros partidarios de opciones federalistas y descentralizadoras, y el 4 de agosto se reunió con el cardenal Ntumi en Buea y posteriormente con el abogado Felix Agbor Balla y otras figuras anglófonas. En este sentido, el Gobierno estaba dividido en dos campos, los que abogan por una solución negociada al conflicto, liderados por Ngute, y los que se oponen a las conversaciones, liderados por Ngoh Ngoh. La división no responde a líneas lingüísticas, y podría ocultar una pugna por el relevo de Paul Biya al frente del Gobierno, según análisis.[11] Si la línea dura se impone y fracasa la vía Mvolyé, las consecuencias para el país serían graves. Los acontecimientos en el terreno en la última parte del año parecían reforzar los sectores más reacios a las conversaciones.

Género, paz y seguridad

La sociedad civil liderada por mujeres en Camerún ha estado a la vanguardia del desarrollo de enfoques innovadores para abordar el aumento de la violencia y promover una paz con igualdad de género. La Liga Internacional de Mujeres por la Paz (WILPF) de Camerún trabajó con organizaciones de la sociedad civil para defender la participación política plena y significativa de las mujeres, abordar el impacto de género de los crecientes desafíos de seguridad vinculados a los conflictos y aprovechar la agenda de acción de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS). Como parte de su misión de construir una paz sostenible con las mujeres como actores estratégicos clave, WILPF Camerún ha establecido colaboraciones con empresas de medios de comunicación para crear conciencia sobre la agenda WPS y sensibilizar a las comunidades para el cambio. Por su parte WILPF Camerún publicó en octubre un informe donde analizó la dimensión de género en los conflictos en Camerún,[12] investigación realizada entre 2019 y marzo de 2020, con miras a comprender mejor las divisiones actuales que generan el conflicto y la inestabilidad en Camerún. Este análisis captura específicamente las experiencias vividas y los agravios de mujeres y niñas de diferentes componentes de la sociedad camerunesa en sus propios términos, y busca crear un espacio para apoyar los esfuerzos de las mujeres en la prevención, mediación y participación en la resolución de conflictos, a pesar de los importantes obstáculos que persisten a la participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz y seguridad.

Malí (norte)	
Actores negociadores	Gobierno, Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) –MNLA, MAA y HCUA–, Plataforma –GATIA, CMFPR, CPA, facción del MAA–
Terceras partes	Argelia, Francia, ECOWAS, UA, ONU, UE, Centre for Humanitarian Dialogue, Carter Center, organizaciones de la sociedad civil, Mauritania
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Paz y Reconciliación (2015)

Síntesis:
El conflicto armado que afecta a Malí desde principios de 2012 derivó en una crisis institucional –materializada en un golpe militar– y en un progresivo control de la zona norte del país por parte de grupos tuaregs y yihadistas. Desde el inicio del conflicto, diversos actores internacionales –entre ellos ECOWAS, UA y ONU– han promovido iniciativas conducentes al restablecimiento del orden institucional y a la recuperación de la integridad territorial de Malí. En paralelo a las aproximaciones militaristas para enfrentar la crisis, se iniciaron contactos exploratorios con algunos grupos armados (MNLA y Ansar Dine) para buscar una salida

9. Jeune Afrique, Cameroon's Anglophone crisis: Rivalries hamper peace talks, 11 de agosto de 2020.
10. Op. Cit.
11. Bone, R. Maxwell, "Political Infighting Could Obstruct a Nascent Peace Process in Cameroon", WPR, 22 de septiembre de 2020.
12. WILPF, Gender Conflict Analysis in Cameroon, 29 de octubre de 2020.

negociada. Pese al anuncio de un compromiso con el cese de hostilidades de estos grupos insurgentes, a principios de 2013 una ofensiva de Ansar Dine precipitó una intervención militar internacional liderada por Francia. En mayo de 2014 se volvió a poner en marcha un nuevo proceso negociador, liderado por Argelia, en el que el Gobierno de Malí negoció a dos bandas con las dos coaliciones creadas por los grupos armados: la Coordinadora de Movimientos de Azawad (grupos afines a una fórmula federalista/secesionista) y la Plataforma (grupos afines al Gobierno). En julio de 2015 se logró finalmente la firma de un acuerdo de paz en Argel entre el Gobierno, la CMA y la Plataforma, quedando los grupos de corte yihadista fuera de las mesas de negociación, lo que ha mantenido las hostilidades por parte de estos grupos en un nuevo contexto de implementación de las cláusulas presentes en el acuerdo de paz.

Durante el año se produjeron muy pocos avances en la implementación del Acuerdo de Paz de Argel de 2015 debido a los efectos de la crisis de la COVID-19, así como a la crisis sociopolítica padecida en Malí que dio lugar a un golpe de Estado y al establecimiento de un Gobierno transicional. En lo concerniente a los **avances en la implementación del Acuerdo de Paz**, el año se inició con conversaciones sobre seguridad y pacificación en el norte del país mantenidas por la Coalición de Movimientos Azawad (CMA) y la Plataforma en Ménaka, entre el 7 y 8 de enero. En ellas, los signatarios del acuerdo de paz firmaron un acuerdo sobre arreglos de seguridad para evitar la confrontación entre sus respectivas facciones locales, comprometiéndose a unir fuerzas en la región de Ménaka. A mediados de febrero se produjo un paso importante en la implementación del acuerdo de paz, cuando el Ejército reconstituido –fuerza mixta compuesta por tropas nacionales y fuerzas integradas de grupos armados firmantes del acuerdo de 2015– comenzó a desplegarse en las regiones norteñas, llegando la primera unidad militar mixta a la ciudad de Kidal el día 13 de febrero, hito que significó el regreso de las Fuerzas Armadas a la ciudad tras seis años de ausencia. El Carter Center, designado en 2017 centro observador independiente de la implementación del Acuerdo de Paz de Argel de 2015, en su primer informe de seguimiento del año, fechado en abril de 2020[13], remarcó dos grandes retos del Acuerdo: (1) el problema recurrente de la redistribución de distritos administrativos y electorales, que llevó a la subrepresentación de las regiones del norte en las elecciones legislativas de marzo y abril de 2020; y (2) las persistentes inconsistencias y desacuerdos entre las partes signatarias que podían socavar el despliegue del Ejército reconstituido. En este último aspecto, el Carter Center puso de manifiesto la existencia de divergencias entre las partes signatarias en la aplicación del DDR y la reforma del sector de defensa y seguridad, que tienen que ver con: inconsistencias y problemas en el proceso de reintegración de combatientes debido a retrasos en el programa y a desgastes de los soldados ya integrados; desacuerdos sobre las ubicaciones de redespliegue, su plan y el número de soldados desplegados; 2) problemas relacionados con la falta de recursos gubernamentales; 3) obstáculos para el redespliegue del Ejército reconstituido debido a la falta de claridad sobre el papel y las responsabilidades de las unidades, a las luchas por la estructura de mando o la ambigüedad que rodea el futuro del Mecanismo de Coordinación Operativa (MOC). El Carter Center concluyó que si bien los mayores esfuerzos se están ubicando en el impulso del Comité de Seguridad Técnica (CTS), con una atención centrada en los temas de seguridad, las dificultades ponían de manifiesto la fragilidad del proceso relativo al despliegue de las tropas integradas en el norte y sus posibles obstáculos futuros. En este sentido, el informe sostuvo que el enorme peso que tiene la implementación de la reforma del sector securitario está descuidando avanzar en otros aspectos políticos que fueron fundamentales de la rebelión de 2012, como lo representan el incumplimiento de los compromisos de descentralización política, amenazando con socavar la paz sostenible en Malí. En el segundo informe, del 16 de diciembre, el Carter Center señaló los pocos avances logrados en la implementación del acuerdo en 2020 debido a la crisis sociopolítica del país, que tuvo como desenlace la caída del Gobierno presidido por Ibrahim Boubacar Keita en el mes de agosto por un golpe militar. El golpe abrió un nuevo proceso de transición liderado por el National Committee for the Salvation of the People (CNSP), que ratificó que se respetarán todos los acuerdos del pasado, que incluían el Acuerdo de Paz de Argel, el apoyo a la MINUSMA, a la Operación Barkhane, a la fuerza del Sahel G-5, así como a las fuerzas especiales europeas de la iniciativa Takuba.[14]

El Gobierno de Malí así como otros actores nacionales y externos abrieron la posibilidad de explorar vías de negociación de paz con actores con agendas yihadistas

Posteriormente, tras unos meses de negociación y presión interna y externa frente a la Junta Militar, **en octubre se conformó el Gobierno de transición civil y militar, en el cual los grupos armados firmantes del Acuerdo de Paz de Argel accedieron a representación, portando algunas carteras ministeriales como la de Agricultura y Pesca o la de Jóvenes y Deportes**. Este hecho significó que por primera vez representantes de todos los movimientos signatarios son miembros del Gobierno. Según el balance realizado por el Carter Center, tras cinco años de la firma del acuerdo, si bien se han completado todos los pasos intermedios, el reto reside en actuar sobre las disposiciones centrales del acuerdo, que incluyen: avanzar en la mayor representación de la población del norte en las instituciones nacionales y descentralizar la gobernanza; culminar el proceso de DDR; reformar el sector de seguridad, incluida la formación y el redespliegue efectivo del Ejército reconstituido; implementar los proyectos de desarrollo económico en las regiones del norte según se establece en el Capítulo IV; impulsar la reforma del sistema judicial; y dar pasos

13. The Carter Center, *Report of the Independent Observer. Observations on the Implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, Resulting from the Algiers Process*, abril 2020.
14. Véase el resumen sobre Malí en el capítulo 2 (Tensiones) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* Barcelona: Icaria, 2021.

clave en la justicia transicional, con miras a mejorar la reconciliación nacional.[15]

Por otro lado, durante el año el Gobierno maliense abrió la puerta a iniciar **negociaciones de paz con algunos grupos con agendas yihadistas no signatarios del Acuerdo de Paz de Argel**. El 10 de febrero, el entonces presidente Keita, anunció por primera vez su apoyo al diálogo entre el Ejecutivo y los líderes yihadistas Amadou Kouffa (Frente de Liberación de Macina) e Iyad ag Ghaly (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –JNIM o GSIM–). El llamamiento generó que el JNIM anunciara el 8 de marzo su voluntad de entablar conversaciones con la condición de que las fuerzas francesas de la operación Barkhane y la misión de la ONU en el país (MINUSMA) se retiraran de Malí. A su vez, según informaciones de prensa, esta postura del JNIM generó desafección de miembros opuestos a la apertura de negociaciones con el Gobierno, produciéndose deserciones de la organización y su unión a las filas del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP o ISGS). La decisión del JNIM también dio inicio a una guerra abierta contra el ISWAP. Posteriormente, el 3 de junio, fuerzas francesas anunciaron la muerte del líder de AQMI, Abdelmalik Droukdal, en una operación en Kidal. Su muerte proporcionó al líder del JNIM, Iyad Ag Ghaly, más espacio para maniobrar. Más tarde, **JNIM y el Gobierno acordaron un intercambio de prisioneros, hecho que fue saludado por el Comisionado de Paz y Seguridad de la UA, Smail Chergui, y por el secretario general de la ONU, António Guterres, expresando su apertura al diálogo con militantes yihadistas en el Sahel**. El cambio de posición de estos actores reflejó la necesidad de involucrar a todos los actores armados en el diálogo para frenar la violencia, independientemente de sus creencias ideológicas. Sin embargo, si bien el primer ministro del Gobierno de transición de Malí, Moctar Ouane, también declaró la voluntad del pueblo de Malí de entablar un diálogo, desde el lado francés se rechazó públicamente las conversaciones con los grupos yihadistas. Sin embargo, al finalizar el año la posición francesa se ha vuelto más matizada al respecto, abriendo la posibilidad de dialogar con una contraparte que sea representativa y legítima.

Género, paz y seguridad

Según el informe de diciembre del Carter Center, tanto el Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) como diversos socios internacionales han promovido activamente la participación de las mujeres en los órganos de seguimiento del acuerdo de paz. Durante las sesiones del CSA realizadas en junio y noviembre, participaron nueve mujeres (tres por cada parte signataria), lo cual representa un progreso real con respecto a la composición anterior del CSA. Sin embargo, el Carter Center señaló que aún queda pendiente la inclusión de mujeres en los cuatro subcomités y los demás órganos de ejecución, así como la creación de los Observatorios de la Mujer en las regiones norteñas.

Cuerno de África

Eritrea – Etiopía	
Actores negociadores	Gobierno de Eritrea, Gobierno de Etiopía
Terceras partes	Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, EEUU
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Cese de Hostilidades (Argel, 2000), Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Eritrea y el Gobierno de la República Federal Democrática de Etiopía o Acuerdo de Diciembre (Argel, 2000), Decisión concerniente a la delimitación de la frontera entre Eritrea y Etiopía, EEBC (2002), Acuerdo sobre la Paz, la Amistad y la Cooperación Integral (2018)

Síntesis:
En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera entre ambos países no quedó claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la misión UNMEE para supervisarlo y en diciembre firmaron el acuerdo de paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada localidad fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etiopía) a Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que cumpliera el dictamen, lo que forzó la retirada de la UNMEE en 2008. Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía, por lo que la situación continúa estancada desde entonces. Ambos países mantuvieron desde entonces una situación caracterizada por un clima de preguerra, con la presencia de centenares de miles de soldados desplegados en la frontera común, enfrentamientos esporádicos y una retórica beligerante. En 2018 se alcanzó un acuerdo histórico que pretendía poner fin al conflicto entre ambos Estados.

Dos años después de la firma del histórico acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía, **el proceso de implementación del acuerdo siguió estancado como consecuencia de la escalada de la tensión y el inicio del conflicto armado entre el Gobierno etíope y el gobierno de la región de Tigray**. A pesar de que se han implementado

15. The Carter Center, *Report of the Independent Observer. Observations on the Implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, Resulting from the Algiers Process*, diciembre 2020.

medidas positivas en algunas áreas, otras han seguido totalmente paralizadas como consecuencia de las tensiones y la guerra iniciada en noviembre entre el Gobierno federal de Etiopía y el estado regional de Tigray, a lo que se sumó la animosidad no resuelta entre Tigray y los líderes eritreos. En este último aspecto, aunque el epicentro de la disputa se sitúa en la localidad fronteriza de Badme, reclamada por ambos países, las causas son más profundas, tal y como señaló el ISS sudafricano en septiembre.[16] Estas incluyen rivalidades históricas, diferencias políticas y económicas y competencia hegemónica entre las élites gobernantes de ambos países, en concreto entre los dirigentes eritreos y el partido gobernante en el estado de Tigray en Etiopía, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), el partido político dominante de Etiopía hasta que Abiy Ahmed llegó al poder.

Si bien el acuerdo de paz de 2018 y los primeros pasos en su implementación generaron altas expectativas, dos años después este potencial se ha desvanecido debido a las tensiones generadas en Badme. El estado regional de Tigray y Eritrea comparten la frontera que fue impugnada. Badme también está bajo la administración de Tigray, por lo que los líderes de TPLF de la región comparten la responsabilidad de implementar la decisión de la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC, por sus siglas en inglés). Pero el proceso de paz se inició desde Addis Abeba y no hubo consultas adecuadas ni formación de consenso entre las partes interesadas como el TPLF, tal y como ha señalado el ISS. Esta exclusión, junto con otras diferencias políticas relacionadas con la pérdida de poder del TPLF,[17] han agravado la división entre el Gobierno de Abiy Ahmed y el gobierno del TPLF en Tigray. Un punto de controversia es cómo interactuar con Eritrea. Abiy, en su discurso inaugural de abril de 2018, anunció la aceptación incondicional de su administración del estancado acuerdo de Argel firmado en 2000 y destinado a poner fin a la guerra fronteriza. En febrero de 2020, Debretsion Gebremichael, el presidente de la región de Tigray y líder del TPLF, dijo que se necesitaba un proceso de paz estructurado que incluyera a todas las partes relevantes, no solo a los dos líderes nacionales. El acuerdo de paz de 2018 requiere la participación de los principales actores políticos de ambos países, incluídos de la región de Tigray. A esto se suma la hostilidad entre las élites gobernantes de Eritrea y las de la región de Tigray, lo que también obstaculiza el progreso.

En consecuencia, tal y como destacó el ISS, es imprescindible la reconstrucción de la confianza entre el TPLF, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y el presidente eritreo, Isaias Afewerki, para que avance la implementación del acuerdo.

Somalia	
Actores negociadores	Gobierno Federal, líderes de los estados federales y emergentes (Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste), movimiento político-militar Ahlu Sunna Wal-Jama'a, líderes de clanes y subclanes, Somalilandia
Terceras partes	ONU, IGAD, Turquía, entre otros
Acuerdos relevantes	Hoja de Ruta para poner fin a la transición (2011), Acuerdo de Kampala (2011), Constitución Federal Provisional (2012), Declaración de Mogadiscio sobre el Foro Consultivo Nacional (2015)

Síntesis:
El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra la dictadura de Siad Barre y tres años después consiguió derrocarlo. Desde 1991, se han celebrado más de 15 procesos de paz para tratar de establecer una autoridad central con diferentes propuestas. Cabe destacar los procesos de Addis Abeba (1993), Arta (2000) y Mbagathi (2002-2004). El centralismo del Estado somalí había derivado en un elevado autoritarismo en tiempos de Barre, por lo que las diferentes propuestas pretendían establecer un Estado que no concentrara el poder, fórmula ampliamente rechazada por la sociedad somalí. Sin embargo, algunos clanes y señores de la guerra rechazaron el modelo descentralizado o federal porque representaba una amenaza a su poder. El poder de algunos señores de la guerra que han convertido el conflicto en su modus vivendi, la representatividad y los equilibrios de cuotas de poder para configurar el futuro Gobierno entre los diferentes actores y clanes que componen la estructura social somalí agraviados y enfrentados durante la dictadura de Siad Barre y tras años de guerra, la injerencia de Etiopía y Eritrea y la postura errática de la comunidad internacional han dificultado la resolución del conflicto. El ascenso del Islam político como alternativa de poder a través de los tribunales islámicos y la internacionalización del conflicto con la irrupción de combatientes extranjeros en el brazo armado de los tribunales, al-Shabaab, así como la invasión etíope y el papel de EEUU en la lucha contra el terrorismo, han contribuido a dificultar la situación. El Gobierno Federal de Transición, surgido del proceso de paz de Mbagathi (2004), finalizó su andadura en 2012 dando paso al Gobierno Federal. Este Gobierno debía ser el encargado de celebrar las elecciones en 2016. El Foro Consultivo Nacional celebrado en 2015 sentó las bases para que en 2016 se alcanzaran los diferentes acuerdos de implementación del proceso electoral, que se celebró a finales de 2016 y principios de 2017. Este Gobierno, cuestionado por su ineficacia y por corrupción, consiguió celebrar elecciones entre 2016 y 2017, consiguió avances y acuerdos de cara a la implementación del proceso electoral y en el proceso de construcción de la federación entre los diferentes estados somalíes, y se prevé la organización de elecciones a inicios de 2021.

Durante el año persistieron las acciones del grupo armado al-Shabaab así como las operaciones de AMISOM y de EEUU contra el grupo armado, causando centenares de víctimas mortales.[18] **Diversas voces**

16. Tadesse Demissie, S. (2020), *The Eritrea-Ethiopia peace deal is yet to show dividends*, Institute for Security Studies, 11 de septiembre.
17. Véase Etiopía (Tigray) en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* Barcelona: Icaria, 2021.
18. Véase el resumen sobre Somalia en el capítulo 1 (Conflictos armados) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* Barcelona: Icaria, 2021.

hicieron llamamientos al diálogo entre el Gobierno Federal y al-Shabaab aunque no trascendieron contactos. Por otra parte, las tensiones entre el Gobierno Federal y los estados federados de cara a la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 fueron en aumento durante el año, aunque en septiembre se alcanzó un acuerdo de cara a avanzar en el proceso electoral, desbloqueando una situación de *impasse* que amenazaba con retrasar la cita más allá del límite constitucional del gobierno actual, lo que hubiera añadido más incertidumbre y tensión a la situación.

Las consultas entre el Gobierno Federal y los dirigentes de todos los estados miembros federados, que comenzaron con una serie de reuniones en Dhusamareb durante el mes de julio, concluyeron en Mogadiscio el 17 de septiembre con un acuerdo sobre el modelo electoral. El 22 de junio, el presidente Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmajo" había celebrado una reunión virtual con los dirigentes de los estados miembros federados y el gobernador de la región de Banaadir. **Era la primera vez que todos los dirigentes federales y estatales se reunían en un foro de adopción de decisiones desde junio de 2018, lo que supuso un importante paso hacia la reanudación del diálogo** y la colaboración. Los dirigentes acordaron celebrar una cumbre presencial en julio.

El presidente Farmajo a principios de septiembre se reunió con los presidentes de estados miembros de Puntlandia y Jubalandia después de que se distanciaron del acuerdo en agosto. Los jefes de los cinco estados miembros federales (los dos anteriores más Galmudg, Hirshabelle y Suroeste) se reunieron del 13 al 17 de septiembre y acordaron un marco electoral indirecto para las urnas en 2020-2021. En julio la Cámara Baja del Parlamento Federal aprobó una moción de censura contra el primer ministro Khaire, por 170 votos a favor y 8 en contra. Al presentar la moción, el presidente del Parlamento, Mohamed Sheikh Mursal Abdirahman, acusó al primer ministro de no haber preparado un plan claro para celebrar elecciones basadas en el principio del voto individual (una persona, un voto); completar el federalismo; decidir el estatuto de Mogadiscio, ultimar la revisión de la Constitución y celebrar un referéndum sobre la cuestión; y establecer el sistema de partidos políticos. El presidente Farmajo anunció que aceptaba la decisión y el 19 de octubre la Cámara Baja aprobó un nuevo gabinete liderado por el nuevo primer ministro Mohamed Hussein Roble, quien a su vez había sido nombrado por Farmajo el 17 de septiembre. Los 188 diputados votaron a favor del nuevo gabinete, en el que una parte importante fue renovada, mientras que otros ministros tuvieron continuidad.

El modelo acordado en septiembre era similar al modelo electoral de 2016; se mantenía la selección de delegados electorales y los distritos electorales basados en clanes. El proceso electoral será llevado a cabo por comités electorales federales y estatales recién establecidos en lugar de por la Comisión Electoral Nacional Independiente. En comparación con 2016, el nuevo modelo amplía de 51 a 101 el número de delegados por cada miembro del Parlamento en la Cámara Baja. Los delegados serán seleccionados por los ancianos tradicionales, los gobiernos estatales y representantes de la sociedad civil. La votación tendrá lugar en Mogadiscio y en dos centros de población de cada estado miembro federado, mientras que en 2016 solo se habilitó un emplazamiento por estado. En virtud del acuerdo, también se garantizó una cuota del 30% para la representación de las mujeres en el Parlamento. Los órganos legislativos de los estados miembros federados seleccionarán a los miembros de la Cámara Alta y la votación de los parlamentarios que representen a "Somalilandia" tendrá lugar en Mogadiscio. Sin embargo, los retrasos en los preparativos en 2020 sembraron las dudas sobre el proceso, ya que acelerarlo podría ser perjudicial para su transparencia y legitimidad, por lo que el International Crisis Group planteó un retraso de unos meses.[19]

Cabe destacar el registro de un nuevo partido político, Justicia y Seguridad, por las implicaciones que conlleva, al estar liderado por el antiguo vicecomandante de al-Shabaab y portavoz del grupo, Sheikh Mukhtar Robow Ali, también conocido como Abu Mansur. Robow, que se encontraba bajo arresto domiciliario en Mogadiscio, y que había abandonado al-Shabaab en 2017 por desacuerdos con el liderazgo del grupo. Desde entonces ha sufrido diversos atentados por parte de al-Shabaab, y en diciembre de 2018 fue arrestado tras prohibírsele concurrir a la presidencia del estado del Suroeste, lo que provocó movilizaciones y disturbios por parte de sectores juveniles de la región entre los que se había hecho muy popular. Aunque las próximas elecciones no se basarán en un sistema multipartidista, el registro del partido significa que Robow intentará competir en las futuras elecciones nacionales, que sí deberán ser multipartidistas. Cabe recordar que el anterior representante especial de la ONU en Somalia, Nicholas Haysom, fue expulsado por el Gobierno a finales de 2018 con acusaciones de inmiscuirse en los asuntos internos de Somalia, ya que Haysom había cuestionado el arresto de Mukhtar Robow. Haysom fue sustituido en mayo de 2019 por el diplomático norteamericano James Swan como su nuevo enviado para Somalia.

Cargos de las Fuerzas Armadas de Kenia que han participado en AMISOM señalaron que era necesario un cambio de estrategia en la guerra en Somalia, ya que las acciones militares se estaban demostrando como inefectivas ante un grupo que basa su fuerza en la fe en el Islam. Diversos analistas han destacado que la estrategia securitizadora estadounidense y de

19. International Crisis Group, *Staving off Violence around Somalia's Elections,* Briefing 163 / Africa, International Crisis Group,10 de noviembre de 2020.

la comunidad internacional en su conjunto, con el beneplácito del Gobierno somalí, se ha revelado como un fracaso porque no ha reducido el impacto de las actividades de al-Shabaab y ha causado numerosas víctimas civiles. En este sentido, han surgido diversas voces reclamando una aproximación a al-Shabaab para promover un proceso de negociación similar al que se ha celebrado en Afganistán entre EEUU y los talibanes. Sin embargo, los expertos en la cuestión están divididos sobre la posibilidad efectiva de que se pueda desarrollar un proceso de diálogo en la actualidad.

Por otra parte, cabe destacar la celebración en junio de conversaciones directas entre el Gobierno Federal y Somalilandia, las primeras desde 2014. El último intento de diálogo tuvo lugar en 2015 a iniciativa de Turquía, y fracasó antes de empezar. Así, a iniciativa del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y del presidente de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, se celebró una reunión directa entre los presidentes del Gobierno Federal, Farmajo y de Somalilandia, Muse Bihi Abdi. Esta reunión tuvo lugar en Djibouti el 14 de junio, con el fin de facilitar la reanudación del diálogo entre Somalia y Somalilandia. La reunión contó con el apoyo de EEUU y la UE. Ambas partes acordaron formar un comité conjunto que se reunió en Djibouti del 15 al 17 de junio, con la mediación del ministro de Exteriores de Djibouti y facilitadores de EEUU y la UE. El comité deliberó sobre el camino a seguir para las conversaciones, estableció tres subcomités técnicos sobre la coordinación de la ayuda, la gestión del espacio aéreo y la cooperación en materia de seguridad y acordó reanudar sus labores en Djibouti en un plazo de 45 días.

Género, paz y seguridad

El Gobierno Federal se comprometió a asignar escaños específicos para la contienda electoral a fin de asegurar la cuota del 30% de mujeres prevista en el modelo electoral acordado. El 3 de septiembre y 19 de octubre, la UNSOM consultó a mujeres dirigentes sobre las medidas necesarias para alcanzar la cuota del 30% y mejorar la participación política de las mujeres más allá de las elecciones. Mientras tanto, el 27 de septiembre, la Cámara de Representantes de Somalilandia votó a favor de eliminar del proyecto de ley electoral de Somalilandia una cuota del 22% para la representación de mujeres.

En preparación para las próximas elecciones, ONU Mujeres, junto con el Ministerio de Asuntos de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil, y con la asistencia financiera del fondo fiduciario de asociados múltiples, organizó un curso de capacitación para 200 mujeres dirigentes y aspirantes a ocupar cargos políticos en Gaalkacyo, Baidoa, Garoowe y Hargeysa. Asimismo, tras una reciente evaluación de la violencia contra las mujeres durante las elecciones en Somalia, ONU-Mujeres facilitó la capacitación de 100 representantes de organizaciones de la sociedad civil acerca de la vigilancia y la presentación de informes sobre la violencia relacionada con las elecciones, en dos cursos que se llevaron a cabo en Hargeysa y Garoowe los días 30 de septiembre y 4 de octubre, respectivamente. Los días 21 y 22 de octubre, la Iniciativa de Liderazgo de las Mujeres Somalíes celebró un foro sobre el empoderamiento político de las mujeres. El foro contó con la asistencia de unos 150 participantes, entre ellos miembros de los parlamentos, el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente y destacadas mujeres dirigentes de los estados miembros federados, la región de Banaadir y Mogadiscio, que examinaron y debatieron las opciones para la aplicación de la cuota de representación de las mujeres del 30%. Las mujeres dirigentes emitieron un comunicado en el que se instaba a los dirigentes somalíes y a los asociados internacionales a respaldar y alcanzar la cuota del 30% para las mujeres en las elecciones de 2020/21 y a apoyar a las mujeres embajadoras de buena voluntad, que habían desempeñado un papel fundamental durante el proceso electoral de 2016. Finalmente, cabe destacar que el 14 de junio, mujeres dirigentes de la ciudad de Xuddur se reunieron con el presidente del estado del Suroeste, Abdiaziz Hassan Mohamed "Laftagareen", para hablar de la falta de representación de las mujeres en el actual consejo de distrito. El presidente les aseguró que las próximas elecciones en Xuddur seguirían un modelo implementado en el distrito de Diinsoor, mediante el cual se había logrado una representación de la mujer del 47%.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Actores negociadores	Gobierno, oposición política y social agrupada en el Conseil National pour le respect de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et la Restauration d'un Etat de Droit (CNARED)
Terceras partes	
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Arusha para la paz y la reconciliación en Burundi (2000), Acuerdo global de alto el fuego (2006)

Síntesis:
La mediación iniciada en 1998 por el presidente tanzano Julius Nyerere y culminada por el sudafricano Nelson Mandela cristalizó en la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000, que sentó las bases para poner fin al conflicto en Burundi iniciado en 1993. Este acuerdo, aunque no redujo totalmente el clima de violencia hasta unos cuantos años más tarde (con la firma del pacto entre las FNL y el Gobierno, en 2006, y el inicio de su implementación a finales de 2008), supuso el inicio del proceso de transición política e institucional que acabó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, sentaron las bases de futuro para superar el conflicto y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010,

tachadas de fraudulentas por la oposición, ensombreció el proceso de reconciliación y provocó la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales también calificadas como fraudulentas en abril de 2015, la subsiguiente escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. Desde entonces, la EAC ha facilitado sin éxito un diálogo político entre el Gobierno y la coalición CNARED, que agrupa a la oposición política y social, parte de ella en el exilio por ser considerada como la responsable o cómplice del golpe de Estado de 2015.

En Burundi, el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición estuvo totalmente paralizado desde 2019 y diferentes acontecimientos llevaron a que se diera por cerrado en 2020. Los encuentros celebrados entre el Conseil National pour le respect de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et la Restauration d'un Etat de Droit (CNARED) y representantes del Gobierno durante 2019 para estudiar las condiciones del retorno de los líderes exiliados fueron la antesala de que el CNARED anunciara en diciembre de 2019 su voluntad de participar en las elecciones generales de mayo de 2020. El anuncio tomó por sorpresa a numerosos sectores. El 11 de diciembre de 2019 el secretario ejecutivo de la coalición, Anicet Niyonkuru, llegó a la capital, Bujumbura, desde Bruselas, junto con otros 15 políticos opositores que han vivido en el exilio en los últimos cuatro años. Niyonkuru afirmó a su llegada que las elecciones eran el único camino para mejorar la situación en el país, inmerso en una grave crisis política y en un clima de guerra desde las elecciones de 2015 en las que Pierre Nkurunziza se postuló a un tercer mandato presidencial que muchos señalaron como inconstitucional y que ganó en medio de un clima de violencia política y envuelto en acusaciones de fraude e irregularidades, además del boicot de la oposición. Niyonkuru afirmó que su partido, el CDP, y su coalición CNARED, no repetiría los mismos errores cometidos en 2010 y 2015 cuando boicotearon las elecciones, facilitando el camino para una fácil victoria del CNDD-FDD, y que participarían tanto si mejoraba la situación política como si no. La decisión provocó tanto críticas como elogios de otras organizaciones políticas. Algunos políticos argumentaron que la decisión era una capitulación de la dura postura inicial de la alianza sobre el tercer mandato del presidente, que los críticos aún consideran inconstitucional.

La postura del CNARED ha evolucionado desde 2015. Al comienzo de la crisis, CNARED anunció que no mantendría conversaciones con el Gobierno de Nkurunziza hasta que este renunciara y aceptase un gobierno de transición. Posteriormente, CNARED acordó participar en el diálogo en Burundi bajo los auspicios del mediador regional Yoweri Museveni, presidente de Uganda, y el facilitador internacional y ex presidente de Tanzania Benjamin Mkapa. El diálogo interburundés terminó en un fracaso tres años después, cuando Mkapa anunció que renunciaba a su rol de facilitador el 9 de febrero de 2019. Durante el año 2019, los líderes del CNARED se desplazaron entre Bélgica y Uganda para realizar consultas destinadas a explorar las posibilidades de regresar a Burundi. En este sentido la división del CNARED puesta de manifiesto en enero de 2019 con la retirada de la coalición de cuatro partidos opositores y del antiguo vicepresidente Frédéric Bamvuginyumvira, reacios al retorno sin compromisos firmes en términos de cambios reales por parte del Gobierno, así como los diversos contactos llevados a cabo durante el año 2019 entre representantes del Gobierno y de la CNARED, como los celebrados el 28 de agosto y el 2 de septiembre en Nairobi con el Defensor del Pueblo, el ex ministro de Interior, Edouard Nduwimana (aliado de Nkurunziza), apuntaban en esta dirección. A principios de octubre de 2019 Anicet Niyonkuru visitó Burundi y se reunió con el asistente del ministro del Interior, Tharcisse Niyongabo, para discutir en torno al regreso de los miembros del CNARED exiliados.

Hasta cierto punto, la coalición se inclinó hacia el regreso por los duros hechos de la situación política, según señalan analistas. La Corte de Justicia de África del Este emitió el 7 de diciembre de 2019, días antes del regreso de Niyonkuru y el resto de líderes en el exilio, un fallo por el que el presidente Nkurunziza no violó la Constitución de Burundi ni las leyes de la organización East African Community (EAC). La decisión está en consonancia con la adoptada por el Tribunal Constitucional de Burundi, justo después de que la oposición impugnara el tercer mandato de Nkurunziza.

Los meses previos a las elecciones de mayo se caracterizaron por las denuncias de violaciones de los derechos humanos, entre ellas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, así como por actos de violencia como los enfrentamientos entre miembros de partidos políticos rivales. A mediados de febrero el Gobierno rechazó extender visados para permitir que seis políticos en el exilio en Uganda pudieran viajar a Burundi, por lo que les prohibió de facto regresar al país. En consecuencia, la decisión del CNARED poco influyó en una apertura del espacio político por parte del Gobierno y del CNDD-FDD, según diversos análisis. Además, el Gobierno entrante formado por el nuevo presidente Evariste Ndayishimiye estaba dominado por representantes del ala dura del régimen, e incluso pesaban sanciones internacionales contra el nuevo primer ministro, Alain Guillaume Bunyoni, y el ministro de Interior, Gervais Ndirakobuca, por su implicación en actos de represión y violencia contra civiles desde 2015. Sectores opositores en el exilio denunciaron la falta de representación de la minoría tutsi en el nuevo Gobierno y entre los gobernadores regionales –un ministro y tres gobernadores.

Género, paz y seguridad

Las mujeres han estado excluidas de las diferentes iniciativas de paz desde la firma de los acuerdos

de Arusha. Si bien en 2015 se alcanzó y superó la cuota constitucional del 30% de representación en la Asamblea Nacional (36,4%) y el Senado (47%), la representación de las mujeres en la adopción de decisiones a nivel local sigue siendo baja. Representan el 17% a nivel de los consejos de las colinas (elecciones de 2015), el 32,7% de los jefes de municipios y el 6,4% de los jefes de las colinas. Es por esta razón que en julio la oficina de ONU Mujeres en Burundi y el Foro Nacional de Mujeres firmaron un acuerdo de asociación destinado a fortalecer la participación política de las mujeres en los próximos eventos políticos. El proyecto pretende incrementar la participación de las candidatas de las colinas, alcanzando así al menos el 20% de las candidatas en las cuatro provincias más pobladas del país, Gitega, Karusi, Makamba y Ngozi. Además, se esperaba que este proyecto permitiera involucrar a mujeres líderes electas para promover la agenda común de las mujeres durante la nueva legislatura.

RCA	
Actores negociadores	Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias anti balaka
Terceras partes	Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (UA y CEEAC con apoyo de la ONU, CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad), Comunidad de Sant'Egidio, ACCORD, OCI, Grupo de Apoyo Internacional (ONU, UE, entre otros), Centre for Humanitarian Dialogue, China, Rusia, Sudán
Acuerdos relevantes	Pacto republicano para la paz, la reconciliación nacional y la reconstrucción en la RCA (2015), Acuerdo de Cese de Hostilidades (junio de 2017), Hoja de Ruta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Libreville, julio de 2017), Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de Khartoum (Bangui, 6 de febrero de 2019)

Síntesis:
Desde su independencia en 1960, la situación en la República Centroafricana se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Tras las elecciones de 2005, en las que venció François Bozizé y que consolidaron el golpe de Estado perpetrado previamente por éste, surgen diferentes movimientos insurgentes en el norte del país, marginado históricamente y de confesión musulmana, que en diciembre de 2012 forzaron la celebración de negociaciones. En enero de 2013 en Libreville el Gobierno de François Bozizé y la coalición de grupos armados, llamada Séléka, acordaron un Gobierno de transición pero Séléka decidió romper el acuerdo y tomó el poder derrocando a Bozizé. No obstante, milicias de autodefensa ("anti balaka"), sectores del Ejército y partidarios de Bozizé se rebelaron contra el Gobierno de Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizada, y en diciembre de 2014 una nueva ofensiva puso fin al Gobierno de Séléka y se configuró un Gobierno de transición liderado por Catherine Samba-Panza. Los líderes regionales, encabezados por el congolés Denis Sassou-Nguesso, facilitaron iniciativas de diálogo en paralelo a la configuración de un proceso de diálogo nacional. El proceso de diálogo nacional culminó en mayo de 2015. Algunos de los acuerdos alcanzados fueron implementados, como la celebración de las elecciones en 2015 y 2016 que pusieron fin a la fase de transición. No obstante, la ventana de oportunidad tras las elecciones fue temporal y no se consiguieron generar las condiciones para iniciar un proceso de paz inclusivo que pudiera facilitar el desarme y la reconciliación, lo que ha comportado la persistencia de la inseguridad y la violencia. Las diferentes iniciativas regionales han confluido en un único marco negociador, la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación puesta en marcha a finales de 2016, bajo los auspicios de la UA y de la CEEAC con el apoyo de la ONU, que estableció en julio de 2017 la Hoja de Ruta de Libreville.y que contribuyó a alcanzar el Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de febrero de 2019,[20] en fase de implementación, a pesar de las dificultades.

La implementación del Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de RCA de 2019 fue problemática, ya que varios grupos armados continuaron violando el acuerdo y obstruyendo la restauración de la autoridad gubernamental, lo que dificultó los preparativos de las elecciones generales del 27 de diciembre. Además, se produjo un resurgimiento de la violencia en el país. El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la MINUSCA hasta el 15 de noviembre de 2021 y las sanciones, entre ellas el embargo de armas, hasta el 31 de julio de 2021.

El retorno de la autoridad del Estado al interior del país fue cosmético debido a la inseguridad existente y a la falta de recursos humanos y materiales, así como al escaso despliegue de las Fuerzas Armadas, cuerpo que sufre de una dotación logística insuficiente y dependiente de la MINUSCA, según señaló el International Crisis Group en diciembre.[21] El expresidente Michel Djotodia regresó el 10 de enero de un exilio de seis años y al día siguiente el presidente Faustin-Archange Touadéra le dio audiencia para felicitarle por su retorno. El 21 de enero el expresidente Bozizé, retornado clandestinamente en diciembre del exilio y sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura, se reunió también con Touadéra. El presidente Touadéra inauguró el 12 de mayo el despliegue del primer batallón de las unidades especiales mixtas de seguridad (USMS) –estipuladas en el acuerdo de 2019 y compuestas por soldados y miembros de grupos armados desmovilizados– en la localidad de Bouar, en la prefectura de Nana-Mambéré. En mayo, las fuerzas de defensa y seguridad nacionales y las autoridades administrativas se desplegaron en la prefectura de Bamingui-Bangoran por primera vez desde 2013. Los prefectos de Nana-Grébizi y Ouaka pusieron en

20. Véase la edición anterior de este anuario.
21. International Crisis Group, *Réduire les tensions électorales en République Centreafricaine*, Crisis Group Núm.296, 10 de diciembre de 2020.

marcha comités de seguridad en Ippy y Mbrès el 9 y el 17 de agosto, respectivamente. El 16 de junio, el comité ejecutivo de seguimiento del Acuerdo Político celebró una sesión para debatir sobre la violencia en Ndélé (prefectura de Bamingui-Bangoran); se acordó otorgar prioridad a la justicia transicional en la resolución del conflicto entre los grupos étnicos gula y runga. Las iniciativas nacionales se complementaron con iniciativas de mediación locales. Sin embargo, los progresos realizados en el establecimiento de las USMS previstas en el acuerdo fueron limitados. A 1 de octubre, un total de 216 miembros de las unidades se habían desplegado en Bouar desde Paoua, mientras que unos 346 permanecían en Bouar. Sin embargo, aún no habían comenzado sus operaciones. El 18 de agosto, el comité estratégico de las unidades especiales mixtas de seguridad seleccionó Birao, Bria, Ndélé y Kaga Bandoro como emplazamientos para futuros despliegues.

Sin embargo, en enero los grupos armados FPRC, UPC y MPC denunciaron conjuntamente los retrasos en la implementación del acuerdo de paz e hicieron un llamamiento a realizar nuevas conversaciones de paz. Posteriormente, algunos grupos armados abandonaron el acuerdo de 2019, y los contactos del Gobierno con estos grupòs o con aquellos que habían amenazado con ello fueron constantes. El 25 de abril siete grupos armados firmantes del acuerdo de paz de febrero de 2019 anunciaron la suspensión de su participación en el Gobierno y en los mecanismos de implementación del acuerdo de paz de 2019, acusando al Gobierno de incumplir sus compromisos. Días antes, el presidente Touadéra y el primer ministro Firmin Ngrébada se habían reunido, respectivamente, con los líderes de los grupos armados UPC, Ali Darassa y FPRC, Abdoulaye Hissène, sin éxito en Bangui, para explorar la posibilidad de conseguir un compromiso en la reducción de la violencia de cara a la celebración de las elecciones, ya que estos dos grupos firmaron el comunicado. El 20 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones (prohibición de viajar y congelación de bienes) al líder del FDPC, Abdoulaye Miskine, acusado de reclutar combatientes, y el 5 de agosto impuso sanciones al líder del 3R, Sidiki Abbas, acusándolo de estar involucrado en tráfico de armas y ejecuciones de civiles. El 30 de julio, el primer ministro se reunió en Bangui con el líder del grupo armado UPC, Ali Darassa. Según el acta de la reunión del Gobierno, que el propio Ali Darassa firmó, se comprometió a respetar el redespliegue de la autoridad del Estado, a participar en las operaciones de desarme y desmovilización y permitir la libre circulación de los agentes electorales, a cambio de que se le autorizara a restablecerse en Bambari con una línea de comunicación directa con el primer ministro. En un comunicado de fecha 1 de agosto, Ali Darassa rechazó esa versión de los hechos e indicó que había firmado el acta de la reunión bajo coacción, por lo que no se comprometía con el acuerdo. El 21 de agosto, la UA encabezó una delegación integrada por representantes del Gobierno, la CEEAC y la MINUSCA que se reunió con Mahamat Al-Khatim, líder del grupo armado MPC, en Kaga Bandoro, a fin de alentar al grupo a aplicar el Acuerdo Político. En este sentido, el 2 de septiembre, algunos grupos armados signatarios emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaban las deficiencias de la aplicación del Acuerdo Político. Pidieron que el presidente de la CEEAC, el presidente Ali Bongo Ondimba, organizara un arbitraje de los Jefes de Estado de la región, según lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo. Entre el 3 y el 5 de octubre, representantes del Gobierno, de la MINUSCA y garantes del acuerdo de paz se reunieron con el líder del grupo 3R, Sidiki Abbas, en Koui, en la prefectura de Ouham-Pendé, para discutir los preparativos de los comicios, y Abbas se comprometió a no bloquear el proceso de registro de votantes en el noroeste, y liberó a tres policías secuestrados en septiembre en la misma prefectura. Sin embargo, la violencia y los ataques entre los grupos armados continuaron en el noroeste. Por último, cabe añadir que la plataforma interreligiosa celebró el 8 de agosto un día nacional de oración, ayuno y perdón. El cardenal Dieudonné Nzapalainga y el imán Oumar Kobine Layama, líderes de la plataforma, viajaron a Bossangoa, en la prefectura de Ouham, los días 2 y 3 de septiembre para fomentar la reconciliación y la cohesión social entre las comunidades cristiana y musulmana.

Género, paz y seguridad

Las mujeres estuvieron ausentes de los espacios de decisión y de las iniciativas y procesos de negociación política. Según el informe del secretario general de la ONU en el país, en vistas del proceso electoral de diciembre, la MINUSCA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, emprendieron iniciativas para alentar a las mujeres a participar como votantes y candidatas en el proceso electoral. En Bangui y en las prefecturas se crearon once salas de situación de la mujer con el fin de reforzar el papel de las mujeres en la supervisión de las elecciones. Los diferentes cuerpos de seguridad del país incorporaron progresivamente mujeres en sus filas: a 1 de octubre, las fuerzas nacionales tenían una dotación total de 8.651 soldados, de los que 660 eran mujeres; 1.464 agentes de policía (344 mujeres) y 2.164 gendarmes (228 mujeres) desplegados en todas las prefecturas, excepto Bas Kotto. El 28 de agosto y el 1 de septiembre se graduaron 1.350 policías y gendarmes, entre ellos 395 mujeres. Además, el 9 de julio, el presidente Touadéra nombró a 21 jueces, entre ellos 4 mujeres, en la primera ampliación de la plantilla judicial en cuatro años.

RDC	
Actores negociadores	Gobierno liderado por Cap pour le Changement (coalición liderada por Félix Tshisekedi), en coalición con el Front Commun pour le Congo (coalición liderada por Joseph Kabila, sucesora de la Alianza por la Mayoría Presidencial), oposición política y social, grupos armados del este del país
Terceras partes	Conferencia Episcopal Congolesa (CENCO), Iglesia de Cristo en el Congo, Angola, Tanzania, Uganda, Grupo de Apoyo a la Facilitación del Diálogo Nacional sobre la RDC liderada por la UA, SADC, Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), UA, UE, ONU, OIF y EEUU
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Sun City, Acuerdo de Pretoria y Acuerdo de Luanda (2002); Acuerdo Global e Inclusivo sobre la Transición (2002); Acuerdo de Paz Inclusivo y Global en la RDC (2016)

Síntesis:
Las demandas de democratización en los años noventa acabaron en una sucesión de rebeliones culminando en la conocida como "primera guerra mundial africana" (1998-2003). La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política y los principales actores insurgentes, en un acuerdo de reparto del poder político. A partir de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en 2005. En 2006 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, en medio de un clima de tensión y acusaciones de fraude. En las elecciones de 2011, en las que también venció Kabila, se cometieron numerosas irregularidades y contribuyeron a avivar la inestabilidad, y desde entonces el debate político se centró en el fin de su segundo mandato. En la profunda crisis confluyen las promesas frustradas de democratización (incumplimiento de la Constitución y la celebración de elecciones en los plazos acordados), la pobreza omnipresente y la violencia crónica, y el control del Gobierno depende cada vez más de fuerzas de seguridad en gran parte disfuncionales. La mayoría gubernamental esperaba retener el poder retrasando las elecciones presidenciales que debían celebrarse en diciembre de 2016, mientras que la oposición pretendía forzar el inicio de una rápida transición que culminase con el fin del mandato de Kabila y elecciones. La UA facilitó el diálogo político entre el Gobierno y las diferentes plataformas y partidos opositores, aunque fue la Conferencia Episcopal (CENCO) la que consiguió aproximar al Gobierno y a la principal coalición opositora, Rassemblement, a la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo el 31 de diciembre de 2016. Aunque el acuerdo establecía la celebración de las elecciones en 2017, finalmente se pospusieron a diciembre de 2018. En paralelo, persistieron las acciones de diversos grupos armados en el este del país, algunos de los cuales negociaron el cese de sus actividades con las autoridades políticas y militares.

En RDC, el Gobierno de coalición surgido de las controvertidas elecciones de 2018 y liderado por Félix Tshisekedi se vio afectado por numerosas tensiones y obstáculos que le condujeron a la ruptura a finales de 2020. Por otra parte, persistieron los intentos de las autoridades políticas y militares, con el apoyo de la MONUSCO, de poner fin a las actividades de los grupos armados, ya sea a través de la presión militar o el diálogo y la negociación. Entre las diferentes iniciativas, cabe destacar el proceso político iniciado en 2018 que confluyó en un acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo armado Front pour la Résistance Patriotique de l'Ituri (FRPI). El 28 de febrero de 2020, el Gobierno y el FRPI firmaron un acuerdo de paz. La ONU destacó en su informe de septiembre que los continuos progresos en la aplicación del acuerdo de paz entre el Gobierno y el FRPI habían tenido un efecto positivo en la situación de la seguridad en el sur de Irumu (provincia de Ituri). El proceso dará lugar en última instancia a la desmovilización de unos 1.100 combatientes de la FRPI y su reintegración en sus comunidades de origen. Sin embargo, el proceso de desmovilización aún no había comenzado debido a los desafíos relacionados con la COVID-19 y a los persistentes desacuerdos acerca de la exigencia del FRPI de que se llevara a cabo la liberación de sus miembros, así como la amnistía y la integración en las FARDC de algunos de sus dirigentes.

Por otra parte, en relación a la violencia en Kivu Sur, en mayo, una milicia local Mai-Mai decidió entregarse a las autoridades militares en el territorio de Walungu, en la provincia de Kivu Sur. En julio, el presidente Félix Tshisekedi envió una delegación de antiguos señores de la guerra de la comunidad lendu para negociar un acuerdo de desmovilización con diferentes facciones del grupo armado Cooperative pour le Développement du Congo (CODECO) en el territorio de Djugu, en la provincia de Ituri. La facción de CODECO en la localidad de Kambutso manifestó su disposición a iniciar un proceso de paz que condujera al desarme del grupo. Sin embargo, otras facciones rechazaron sumarse al proceso. El 17 de agosto el comandante de una facción del Nduma Défense du Congo-Rénové (NDC-R) junto con sus 485 combatientes se entregaron al Ejército en la localidad de Kashuga, en el territorio de Masisi, en la provincia de Kivu Norte.

Sin embargo, un hecho destacado del año en términos de construcción de paz en la región fue el anuncio que se produjo el 16 de septiembre, cuando **unos 70 grupos armados activos en Kivu Sur, se comprometieron a poner fin a las hostilidades en las áreas bajo su control**, informaron medios locales recogidos por Anadolu Agency el 17 de septiembre.[22] El anuncio se produjo el 16 de septiembre al término de un diálogo de dos días realizado en Muresa, cerca de la ciudad de Bukavu, bajo los auspicios de la Comisión Interprovincial de Apoyo al Proceso

22. Anadolu Agency, "70 armed groups agree to end hostilities in DR Congo", 17 de septiembre de 2020.

de Concienciación, Desarme, Desmovilización y Reintegración Comunitaria (CIAP-DDRC). El CIAP-DRRC es una iniciativa del Gobierno congolés para la estabilización de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, afectadas por diversos conflictos armados. Este organismo se formó después de la visita del presidente Félix Tshisekedi a Bukavu en octubre de 2019. La iniciativa de desarme también cuenta con el respaldo de la MONUSCO.

Género, paz y seguridad

La MONUSCO siguió promoviendo la ejecución de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad mediante una colaboración específica con las autoridades nacionales, provinciales y locales, así como la promoción de un mayor espacio para la representación y la participación de las mujeres, sobre todo en los procesos de adopción de decisiones relacionados con la COVID-19. La Misión también intensificó sus esfuerzos por apoyar las estructuras comunitarias de prevención de conflictos y reconciliación dirigidas por mujeres, lo que contribuyó a ofrecer una respuesta inclusiva de género a los problemas de protección, incluidas las nuevas pautas de riesgo en el contexto de la COVID-19. Por otra parte, en relación a la violencia criminal, en la provincia de Ituri, tras persistentes ataques de asaltantes, la red de organizaciones de mujeres de Ituri emitió una declaración conjunta en la que exhortó a todos los actores implicados a que adoptaran medidas concretas para poner fin a la violencia, hacer frente a la inseguridad en la provincia y promover un entorno de protección para las mujeres y las niñas.

En abril cabe destacar la celebración de una reunión organizada por la Red Global de Mujeres Constructoras de la Paz (GNWP), con el apoyo de NAMA Women Advancement Establishment. Fue la primera vez que se unieron mujeres del programa Mujeres Líderes por la Paz (YWL) de GNWP de RDC, Bangladesh, Indonesia, Filipinas y Sudán del Sur para compartir y discutir los problemas de paz y seguridad y las soluciones a ellos en medio de la pandemia y a pesar de los problemas de conectividad de la red. Por otra parte, en la segunda parte del año, de conformidad con los principios de la Acción para el Mantenimiento de la Paz destinados a promover soluciones políticas con implicación nacional para el conflicto, la MONUSCO prestó apoyo a las autoridades provinciales de Ituri con miras a la celebración de una serie de consultas que dieron lugar a la firma de un compromiso de paz en el territorio de Mahagi por 42 jefes y dirigentes tradicionales, incluidas ocho mujeres, de la comunidad lendu, y a la adopción de una hoja de ruta por 60 dirigentes locales, incluidas nueve mujeres de la comunidad alur.

Sudán	
Actores negociadores	Gobierno de Sudán, Frente Revolucionario de Sudán (SRF, coalición que aglutina a grupos armados de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur), Movimiento por la Justicia y la Equidad (JEM), Movimientos de Liberación de Sudán, facciones SLA-MM y SLA-AW, Sudan People's Liberation Movement-North (SPLM-N) facciones Malik Agar y Abdelaziz al-Hilu
Terceras partes	African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP), Troika (EEUU, Reino Unido, Noruega), Alemania, UA, UNAMID, Etiopía, Sudán del Sur, Uganda
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz de Darfur (DPA) (2006), Acuerdo de Hoja de Ruta (2016), Declaración de Juba de Medidas de Fomento de la Confianza y la Preparación para la Negociación (2019), Acuerdo de Paz de Juba (2020)

Síntesis:
En el país se mantienen abiertos diferentes conflictos armados (Darfur, Nilo Azul y Kordofán Sur), así como tensiones entre el Gobierno y la oposición, que han supuesto diferentes frentes de negociaciones de paz y desescalada de la violencia. En Darfur, en medio de las conversaciones de paz para resolver el histórico contencioso entre el norte y el sur del país –que acabó con la firma del Comprensive Peace Agreement (CPA) en el 2005–, diversos grupos armados, principalmente el JEM y el SLA, se rebelaron en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región. En 2006 se alcanzó un acuerdo de paz, el Darfur Peace Agreement (DPA), que sólo incluyó a una facción del SLA, la liderada por Minni Minawi, mientras persistió el conflicto y los intentos frustrados de diálogo, principalmente promovidos por Qatar en el marco del proceso de paz de Doha, al que se fueron sumando los diferentes actores. Por otro lado, en las conocidas como las Dos Áreas (Kordofán Sur y Nilo Azul), la secesión de Sudán del Sur en julio de 2011 y la reconfiguración nacional que supuso para Sudán agravaron las tensiones entre esas regiones fronterizas y el Gobierno sudanés, ya que durante el conflicto armado sudanés ambas regiones habían apoyado a la insurgencia sureña del SPLA. La African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP) ha mediado para buscar una resolución pacífica entre las partes (Gobierno y rebelión del SPLM/N) que gira en torno a tres principales ejes en las negociaciones de paz: el modelo de cese al fuego; el tipo de acceso humanitario a las dos áreas; y las características y agenda del Diálogo Nacional. A su vez, a principios de 2014, el entonces presidente sudanés, Omar al-Bashir, hizo un llamamiento al Diálogo Nacional a todos los actores armados y grupos de oposición. La propuesta contó desde sus inicios con la implicación del ex presidente sudafricano Thabo Mbeki y de la AUHIP para promover negociaciones de paz y una transformación democrática. Tras la caída del régimen de al-Bashir en abril de 2019, se han fusionado los diferentes procesos y escenarios de negociación de paz en el país entre el nuevo Gobierno de Transición y los diferentes grupos rebeldes de las Dos Áreas y Darfur.

Tras un año de negociaciones de paz desarrolladas en la capital de Sudán del Sur, Juba, el Gobierno y la coalición rebelde Frente Revolucionario Sudanés (SRF) y la facción del Movimiento de Liberación de Sudán liderada por

Minni Minnawi (SLM/A-MM) firmaron el 31 de agosto un histórico acuerdo de paz. Sin embargo, el acuerdo no logró la firma de la facción del grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte encabezada por Abdelaziz al-Hilu (SPLM-N) –que se retiró de las conversaciones de paz el 20 de agosto–, y de la facción del Movimiento de Liberación de Sudán encabezada por Abdel Wahid al-Nur (SLM/A-AW), quienes se negaron a participar. Sobre la base de las negociaciones de paz iniciadas en septiembre de 2019 con la firma de la hoja de ruta para la paz denominada "Declaración de Juba de Medidas de Fomento de la Confianza y la Preparación para la Negociación", firmada por el Gobierno y los grupos armados SRF, SLM-MM y SPLM-N dirigido por Abdelaziz al-Hilu, bajo la mediación del Gobierno de Sudán del Sur y el respaldo de líderes regionales como el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y el presidente ugandés, Yoweri Museveni, las partes retomaron las negociaciones de paz al inicio del año. En enero se mantuvieron conversaciones entre el Gobierno y el SRF –ya sin la participación del SPLM-N dirigida por al-Hilu– que no lograron lograr la firma de un acuerdo integral en la fecha límite acordada del 14 de febrero. Posteriormente, el 21 de febrero el Gobierno y el SRF llegaron a un acuerdo que establecía un estatus administrativo para los estados del este del país y creaba un fondo de reconstrucción. Las conversaciones entre Gobierno y SRF nuevamente no cumplieron con el plazo autoimpuesto del 7 de marzo para alcanzar un acuerdo de paz integral, y estas fueron pospuestas unos días debido al fallecimiento por un ataque cardíaco del ministro de Defensa de Sudán, Jamal Omer. Tras meses de negociaciones que no lograron cumplir con los plazos impuestos en varias ocasiones debido a desacuerdos internos en el seno de la coalición rebelde SRF, la facción del SLM/A-MM y la facción de JEM liderada por Bakheet Abdelkarim, se separaron de la coalición a mediados de mayo, estableciendo una nueva mesa de negociación de paz con el Gobierno. Finalmente tras un año de negociaciones, la coalición rebelde del SRF[23], la facción del SLM/A-MM y el Gobierno de Sudán **firmaron en Juba, el 31 de agosto, el acuerdo de paz**, que no fue ratificado por el SPLM-N de al-Hilu ni por el SLM/A-AW dirigido por al-Nur. El acuerdo fue formalizado posteriormente el 3 de octubre, siendo aprobado por el Consejo Soberano y el gabinete el 12 de octubre, e incorporado a la declaración constitucional el 18 de octubre. El 12 de noviembre el presidente del Consejo Soberano, Abdel Fattah al-Burhan, firmó el **decreto que otorgaba amnistía general a los líderes de los movimientos armados signatarios, así como a las fuerzas militares y paramilitares involucradas en los conflictos armados**. El decreto permitió que el 15 de noviembre los líderes de SRF y Minnawi llegaran a la capital, Jartum, para comenzar la implementación del acuerdo. Algunas de las cláusulas establecidas en el texto establecen el inicio de un período transitorio de tres años; la integración de los ex líderes rebeldes en el Consejo Soberano (3 puestos), el gabinete ministerial (5 carteras, equivalente al 25% del Consejo de Ministros) y el Consejo Legislativo de Transición (un 25%, lo que equivale a 75 de los 300 escaños); el establecimiento de un sistema de gobierno regional federal en Sudán; la conformación de una fuerza de seguridad conjunta en Darfur de 12.000 miembros iniciales –la mitad de ellos provenientes de las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y la otra mitad conformados por excombatientes rebeldes–. Además, según el acuerdo, Darfur pasa a ser considerada una única región en donde el poder será compartido; las Dos Áreas de Kordofán del Sur y Nilo Azul, más Kordofan Occidental, tendrán autonomía, en donde el poder quedará dividido de la siguiente forma: el SPLM-N Agar ocupará el cargo de gobernador en el estado de Nilo Azul y de vicegobernador en Kordofán Sur y Occidental, con derecho al 30% de los órganos ejecutivos y legislativos en el estado de Nilo Azul y Kordofán Sur y Occidental. Heba Mohamed Ali Ahmed, ministro de Finanzas sudanés, informó que la implementación del acuerdo de paz tendrá un coste de 7.500 millones de dólares en los próximos diez años, de los cuales 1.300 serán destinados a la reconstrucción de Darfur.

El Gobierno de Sudán y los grupos rebeldes del SRF y el SLM/A-MM firmaron un acuerdo de paz tras un año de negociaciones para poner fin a los conflictos armados en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul

Por otro lado, de forma paralela a las negociaciones de paz con el SRF y el SLM/A-MM, el Gobierno mantuvo **conversaciones separadas con las facciones del SPLM-N dirigidas por Malik Agar y Abdelaziz al-Hilu**. En relación a las primeras, el 24 de enero se logró la firma de un acuerdo preliminar entre el Gobierno y la facción de Agar en el cual se otorgó un estatus especial para Kordofán Sur y Nilo Azul, allanando el camino para que los militantes se integren en el Ejército. Posteriormente, el 19 de abril las partes entablaron conversaciones sobre el reparto de la riqueza en los estados del Nilo Azul y Kordofán Sur, logrando un acuerdo el 21 de abril que también se aplicaría al estado de Kordofan Occidental. En lo referente al desarrollo de las negociaciones de paz con la facción del SPLM-N encabezada por Abdelaziz al-Hilu, el año se inició con la extensión, por parte de los rebeldes, del alto el fuego unilateral en los estados de Kordofán Sur y Nilo Azul, que posteriormente fue ampliado hasta enero de 2021. La facción de al-Hilu se había separado de las negociaciones de paz que el Gobierno llevaba a cabo con el SRF, y había firmado en 2019 una Declaración de Principios con el Gobierno, estableciendo una hoja

23. En el momento de la firma del Acuerdo de paz la coalición del SRF estaba integrada por la facción del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte en el estado del Nilo Azul liderada por Malik Agar (SPLM-N Agar) y diversos grupos rebeldes de Darfur: una facción del Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), el Consejo de Transición del SLM, el Grupo de Fuerzas de Liberación de Sudán y la Alianza Sudanesa, que incluye 15 facciones rebeldes más pequeñas.

de ruta diferente sobre el proceso de paz en Kordofán Sur para estudiar las demandas del movimiento sobre la autodeterminación y un estado secular. Tras meses sin establecer espacios de diálogo entre las partes, el 17 de junio se reanudaron las conversaciones de paz, volviéndose a estancar en agosto. Entre el 2 y el 5 de septiembre, el primer ministro Abdalla Hamdok y al-Hilu se reunieron en la capital de Etiopía, Addis Abeba, acordando mantener negociaciones informales para discutir temas contenciosos, como la separación de religión y Estado y el derecho a la autodeterminación con miras a reanudar las conversaciones de paz formales. El 29 de octubre se reiniciaron las conversaciones entre las partes, manteniéndose al finalizar el año. Finalmente, en relación al **Movimiento de Liberación de Sudán encabezada por Abdel Wahid al-Nur (SLM/A-AW)**, si bien el grupo comunicó el 30 de marzo el cese de la violencia en Darfur, adhiriéndose al llamamiento internacional realizado por el secretario general de la ONU para lograr un alto el fuego que permita la aplicación de las medidas sanitarias y evitar la propagación de la COVID-19, reiteró su rechazo a unirse al proceso de paz, solicitando a las Naciones Unidas apoyo humanitario a los civiles afectados por la guerra en Darfur, así como el mantenimiento de la UNAMID.

Finalmente reseñar que a principios de febrero, el secretario general de la ONU accedió a la solicitud del Gobierno de Sudán de establecer una misión política en el país para apoyar la construcción de la paz y el desarrollo. En junio de 2020, el Consejo de Seguridad decidió, en su resolución 2524 (2020), establecer la **Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán (UNITAMS).** La nueva misión política complementará la labor de los organismos y programas de las Naciones Unidas en Sudán y colaborará estrechamente con el Gobierno de Transición y el pueblo del Sudán en apoyo de la transición, entre otros aspectos, para promover la igualdad entre los géneros y los derechos de la mujer. A su vez, la UNITAMS y la misión de mantenimiento de la paz desplegada en Darfur, la UNAMID, colaborarán estrechamente, centrándose en el proceso de paz de Juba, la consolidación de la paz y la protección de los civiles, especialmente en Darfur. La intención del Consejo de Seguridad es que la misión esté desplegada en el país el 1 de enero de 2021.

Género, paz y seguridad

El Consejo de Seguridad de la ONU continuó durante el año respaldando los esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en las actividades de mediación y prevención de conflictos, en particular mediante la Red de Mujeres Africanas en la Prevención de Conflictos y la Mediación. ONU Mujeres siguió prestando apoyo a la Red, que incluyó el despliegue de integrantes de la misma en Etiopía, Sudán y Sudán del Sur. Por otro lado, la organización de mujeres con sede en Kampala, Strategic Iniciative for Women in the Horn of Africa (SIHA), denunció que los casos de violencia sexual en Darfur, principalmente en los campos de desplazados internos del norte, habían aumentado un 50% entre marzo y junio a partir de la aplicación de las medidas decretadas anti COVID-19. La organización realizó un llamamiento al Gobierno de transición para establecer mecanismos de prevención, justicia y protección de civiles, especialmente las mujeres.

Sudán del Sur	
Actores negociadores	Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition (SPLM/A-IO), una serie de grupos menores (SSOA, SPLM-FD, entre otros) y SSOMA (NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC)
Terceras partes	"IGAD Plus": IGAD, que integra a Sudán, Sudán del Sur, Kenia, Etiopía, Eritrea, Yibuti, Somalia y Uganda; UA (Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), UE, ONU, South Sudan Council of Churches, Comunidad de Sant Egidio
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz (2015), Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso Humanitario (2017), Acuerdo revitalizado sobre la resolución del conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018)

Síntesis:
Después de años de conflicto armado que enfrentó al Gobierno central de Sudán y el sur del país, liderado por la guerrilla del SPLM/A, Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente en 2011, tras la realización del referéndum previsto en el acuerdo de paz de 2005 (Comprehensive Peace Agreement, CPA) facilitado con la mediación de la IGAD. La firma de la paz entre Sudán y Sudán del Sur y la consecución de la independencia no logró, sin embargo, acabar con la conflictividad y la violencia. Sudán del Sur siguió envuelto en una serie de conflictos internos promovidos por disputas por el control de territorio, ganado y poder político, así como por las prácticas neo-patrimoniales y la corrupción en el seno del Gobierno, que no han permitido lograr la estabilidad y consolidar la paz. Como parte de las negociaciones de paz impulsadas en abril de 2013, el presidente ofreció una amnistía a seis comandantes de grupos rebeldes que no tuvo buenos resultados iniciales. Posteriormente, en diciembre de 2013, las tensiones entre las facciones leales al presidente Salva Kiir y las leales al ex vicepresidente Riek Machar, líder del SPLA-in-Opposition (SPLA-IO), dieron paso a una nueva escalada de violencia en diversas regiones del país. En enero de 2014, y a través de la mediación de la IGAD, el Gobierno y el SPLA-IO iniciaron conversaciones de paz en Addis Abeba (Etiopía). Los esfuerzos diplomáticos se encontraron con muchos obstáculos para lograr acuerdos de alto el fuego efectivos, habiendo firmado nueve compromisos diferentes entre diciembre de 2013 y agosto de 2015, de cese de hostilidades y medidas transitorias que fueron sistemáticamente violados, lo cual impidió sentar las bases de una solución política al conflicto. El 17 de agosto de 2015, y tras fuertes presiones internacionales y amenazas de bloqueos y sanciones económicas, las partes firmaron un acuerdo de paz promovido por la IGAD Plus, aunque persistieron los enfrentamientos y el incumplimiento del acuerdo. Posteriormente se han logrado nuevos acuerdos entre las partes, como el Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso Humanitario (2017) y el Acuerdo revitalizado sobre la resolución del conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018), que abren nuevas vías para tratar de poner fin a la violencia.

Durante el año se avanzó en la implementación de algunas cláusulas establecidas en el Acuerdo de Paz de Sudán del Sur de 2018 (R-ARCSS), entre las cuales destacó la conformación del gobierno de unidad y el acuerdo sobre la distribución administrativa-territorial, y también se puso en marcha un nuevo proceso de negociación de paz con los grupos armados no signatarios del acuerdo de paz. Las conversaciones relativas a la implementación del acuerdo de paz de septiembre de 2018 se mantuvieron a lo largo del año bajo la mediación del expresidente sudafricano David Mabuza, teniendo como principales obstáculos la **conformación del gobierno de unidad** y, sobre todo, los aspectos relativos a la fórmula de división territorial-administrativa del país. Si bien a principios de año se generaron muchas dudas sobre la capacidad de las partes para conformar el gobierno de unidad en la fecha establecida del 22 de febrero, finalmente, y debido en parte a las fuertes presiones internas y externas, el acuerdo se cumplió y el Gobierno de transición se conformó entre el partido de Salva Kiir, el SPLA-IO y el SSOA. El nuevo Ejecutivo, denominado Revitalised Transitional Government of National Unity (RTGoNU), nombró a los cinco vicepresidentes que se establecía en el pacto, entre ellos, la primera vicepresidencia recayó en la figura de Riek Machar, líder del SPLA-IO. Posteriormente, a principios de marzo se presentó el nuevo gabinete de gobierno, compuesto por 35 ministros y diez viceministros con la siguiente representación: 20 ministros elegidos por el partido de Kiir, nueve por el SPLA-IO, tres por el SSOA, dos por el FD y uno por otros partidos.

En febrero se logró la conformación del Gobierno de Unidad en Sudán del Sur, sin embargo, durante gran parte del año se mantuvieron las tensiones sobre la fórmula administrativa-territorial del país

De manera paralela a la conformación del gobierno, persistió el estancamiento en las negociaciones referentes al número y las fronteras de los estados, así como en las **medidas de seguridad** relativas a la unificación de las tropas gubernamentales y las fuerzas rebeldes en el Ejército nacional. Si bien en este último aspecto las tropas del SPLA-IO comenzaron a trasladarse a los lugares de acantonamiento en los estados de Jonglei, Torit y Wau a principios de año, el programa de formación del nuevo Ejército que estará conformado por 85.000 soldados, quedó suspendido el 27 de marzo como parte de las medidas de contención de la COVID-19 puestas en marcha por el Gobierno. En junio, y sin que se hubiera producido ningún avance significativo, el organismo oficial que supervisa la unificación de los grupos armados advirtió que los lugares de entrenamiento y acantonamiento se encontraban "al borde del colapso" por falta de recursos y apoyo logístico. Por otro lado, en relación a la **división administrativa y fronteriza del país**, la conformación del gobierno de unidad dio paso a la destitución de todos los gobernadores estatales y a la vuelta a la fórmula administrativa de los 10 estados existentes antes del conflicto armado más tres áreas administrativas con un estatus diferenciado: Pibor, Ruweng y Abyei. El acuerdo sobre el nombramiento de los nuevos gobernadores estatales se demoró hasta junio debido a la falta de consenso entre las partes. El 29 de junio el Gobierno anunció el nombramiento de ocho de los diez gobernadores y se acordó que el SPLA-IO designaría al gobernador del estado del Alto Nilo y el SSOA al del estado de Jonglei. El SPLA-IO propuso al general Johnson Olony como gobernador de Alto Nilo, pero fue rechazado por el Ejecutivo de Kiir debido a su negativa a acantonar a sus tropas como estipula el acuerdo de paz. Tras un periodo de estancamiento y de fuertes tensiones entre las partes signatarias, que incluyó un episodio de ruptura del alto el fuego entre el 18 y 19 de julio en Wau, el partido del presidente Kiir, el SPLA-IO, el SSOA y otros partidos políticos, firmaron el 10 de agosto un acuerdo sobre reparto de poder a nivel estatal y local (condados). En el mismo, que complementa el acuerdo de junio sobre el nombramiento de gobernadores estatales, se estipuló la asignación de escaños de cada parte en los gabinetes y parlamentos estatales, así como en las comisiones y consejos de condado. Este acuerdo dio pie a nuevas negociaciones sobre la asignación de puestos a nivel estatal y local, y de forma paralela, a mediados de noviembre, Kiir aceptó la nominación por parte del SPLA-IO de Johnson Olony como gobernador del estado de Alto Nilo, poniendo fin a la disputa por el último gobernador que quedaba por nombrar.

A su vez, entre el 2-15 de noviembre tuvo lugar en Juba el **diálogo nacional** convocado por la Presidencia, al que no se sumaron las principales fuerzas de la oposición. Kiir afirmó que sus diferentes resoluciones se incorporarán a la Constitución permanente del país, ya que reflejan las opiniones de los sursudaneses. Entre ellas, destaca la limitación de mandatos presidenciales a dos, de cinco años cada uno. Sin embargo, el SPLM-IO y el NDM no participaron en la conferencia argumentando que el acuerdo de paz revitalizado reemplaza a cualquier otro proceso y en su lugar pidió su implementación integral.

Por otro lado, durante el año se mantuvieron **conversaciones de paz con los grupos no signatarios del R-ARCSS, organizados a través de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA)**, que incluye diferentes grupos: el National Salvation Front (NAS), el South Sudan United Front (SSUF), el South Sudan National Movement for Change (SSNMC), el Real Sudan People's Liberation Movement (R-SPLM), el National Democratic Movement Patriotic Front (NDM/PF) y el United Democratic Revolutionary Alliance (UDRA). Las negociaciones –que se mantenían al finalizar el año– tuvieron lugar en Roma (Italia), siendo facilitadas por la Comunidad de Sant´Egidio bajo la mediación de la IGAD. En este marco, el primer importante avance se logró el 12 de enero con la firma de la "**Declaración de Roma sobre el Proceso de Paz en**

Sudán del Sur", en donde las partes se comprometieron a un alto el fuego, a garantizar el acceso humanitario y a mantener un diálogo continuo bajo los auspicios de la Comunidad de Sant'Egidio y las organizaciones regionales.[24] El pacto generó que el 29 de enero el Gobierno concediera la amnistía a todas las facciones de SSOMA. La segunda ronda de conversaciones tuvo lugar a mediados de febrero, lográndose una resolución sobre la implementación de la tregua negociada en enero. Sin embargo, los avances en las negociaciones se estancaron y se rompió la tregua militar reactivándose las hostilidades militares en la región de Equatoria Central entre fuerzas gubernamentales y el NAS.[25] Tras meses de suspensión de las rondas de negociación de paz debido, por un lado, a la incapacidad del nuevo Gobierno para nombrar nuevos delegados y, por otro, a los efectos de la pandemia de la COVID-19, las negociaciones se volvieron a retomar el 9 de octubre. En ese momento, la coalición rebelde articulada bajo el SSOMA se fracturó en dos grupos debido a diferencias entre los líderes surgidas tras conocer la existencia de conversaciones secretas entre el SSUF/A, dirigido por Paul Malong, y el Gobierno. Thomas Cirillo, líder del NAS y de la Alianza Democrática Nacional de Sudán del Sur (SSNDA) –coalición armada miembro de SSOMA–, suspendió la participación del SSUF/A del SSOMA, a lo que le siguió la salida de la coalición del Real-SPLM liderado por Pagan Amum. Este hecho generó divisiones en el seno de la coalición que solicitó mesas de negociación diferentes, mientras que el SSUF/A y el R-SPLM quedaron fuera de las mesas. Tras esta fractura, las conversaciones de Roma prosiguieron con un nuevo compromiso con el alto el fuego por parte de la facción SSOMA-Cirillo, que integra al NAS, SSNMC, NDM/PF y UDRA. El 16 de noviembre ambas facciones del SSOMA acordaron unirse al Mecanismo de Verificación y Monitoreo de los Arreglos de Seguridad Transitoria y de Cesación del Fuego (CTSAMVM) destinado a mantener el Cese de Acuerdo de Hostilidades (CoHA) en el país.

Género, paz y seguridad

En relación a la participación de mujeres en los órganos ejecutivo y legislativo del país, destacó la nominación de Rebecca Nyandeng de Mabior como cuarta vicepresidenta del Gobierno de unidad. A su vez, de los 35 Ministerios creados en el nuevo Ejecutivo, 26 fueron ocupados por hombres y 9 por mujeres, destacando el nombramiento de Angelina Teny como ministra de Defensa –siendo la primera mujer en ocupar ese Ministerio– y de Beatrice Khamis en la cartera de Exteriores. Las otras carteras se corresponden con las de Asuntos Parlamentarios, Agricultura y Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y Bosques, Educación e Instrucción, Salud, Género y Asuntos Sociales, y Cultura, Museos y Patrimonio Nacional. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU continuó durante el año respaldando los esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en las actividades de mediación y prevención de conflictos, en particular mediante la Red de Mujeres Africanas en la Prevención de Conflictos y la Mediación. ONU Mujeres siguió prestando apoyo a la Red, que incluyó el despliegue de integrantes de la misma en Sudán del Sur, Sudán y Etiopía.

Sudán - Sudán del Sur	
Actores negociadores	Gobierno de Sudán y Gobierno de Sudán del Sur
Terceras partes	IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), Egipto, Libia, EEUU, UE
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz global (CPA) (2005); Acuerdo de cooperación (2012); Acuerdo de delimitación de la frontera compartida (2019)

Síntesis:
El conflicto bélico entre Sudán y su parte meridional, actualmente Sudán del Sur, que duró más de 30 años se caracterizó por una acentuada complejidad cuya naturaleza abordó distintas dimensiones relativas a la cultura y a la historia de ambos países, marcada por dos guerras civiles (1963-1972 y 1983-2005). El Acuerdo de Paz Global (CPA, por sus siglas en inglés) de enero del 2005 estableció la celebración de un referéndum en el sur del país sobre la independencia de esta región. La consulta se celebró en enero de 2011 y, después de una clara victoria de los partidarios del sí, en julio de 2011 Sudán del Sur declaró su independencia convirtiéndose en un nuevo Estado. Sin embargo, la separación de ambos países no puso fin a las desavenencias entre Jartum y Juba debido a la multiplicidad de asuntos pendientes de resolución entre ambos Gobiernos. Entre los principales obstáculos para la estabilidad se encuentra la disputa por el enclave petrolero de Abyei y la delimitación final de la frontera entre ambos Estados así como la falta de acuerdo en torno a la explotación de los recursos petroleros (con yacimientos en Sudán del Sur pero con oleoductos para su exportación en Sudán). Las acusaciones mutuas respecto al apoyo de movimientos insurgentes en el país vecino han contribuido a desestabilizar más la situación y amenazar la convivencia pacífica de ambos países.

El año mantuvo la dinámica de acercamiento entre los Gobiernos de Sudán del Sur y Sudán iniciadas en 2019 tras la conformación del nuevo ejecutivo sudanés, lográndose avances en las relaciones diplomáticas entre los dos países, así como en lo referente a las delimitaciones fronterizas. Entre los hechos destacados del año, resaltó el papel de mediador desarrollado por las autoridades de Sudán del Sur en el proceso de negociación de paz de Sudán, que condujo a la firma en agosto de 2020 del acuerdo de paz en Juba, Sudán del Sur, entre el Gobierno de transición de Sudán y los grupos armados sudaneses, Frente Revolucionario Sudanés (SRF) y el Ejército de Liberación del Sudán dirigido por

24. "Rome Declaration On The Peace Process In South Sudan", 12 de enero de 2020.
25. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* Barcelona: Icaria, 2021.

Minni Minnawi (SLA-MM). También resultó significativo el acuerdo logrado entre ambos países en septiembre para formar un comité técnico conjunto con el objetivo de reanudar la producción de petróleo en el estado de Unidad y en otros yacimientos petrolíferos clave. A su vez, a finales de octubre, los Ejecutivos de ambos países firmaron un acuerdo conjunto de cooperación militar y de defensa. El Memorando de Entendimiento fue firmado por la ministra de Defensa de Sudán del Sur, Angelina Teny, y su homólogo sudanés, Ibrahim Yassin. El acuerdo incluye acciones de "capacitación, intercambio de experiencias, promoción de la paz, apoyo y gestión de desastres, así como la lucha contra los delitos transfronterizos, el contrabando, la trata de personas y la lucha contra las actividades de elementos contrarios a la paz". El acuerdo significó un importante paso en la normalización de las relaciones entre ambos Estados, luego de años de enfrentamiento y acusaciones mutuas de apoyar y dar cobertura a los grupos rebeldes de ambos lados. El texto también allanó el camino para resolver la situación de la disputada región de Abyei, así como los flecos de la demarcación fronteriza pendientes de resolución entre los dos Estados. En este último aspecto es significativo reseñar que **las dos partes acordaron abrir diez puntos fronterizos, así como cooperar activamente en la producción de petróleo**. Entre octubre y noviembre se produjo una nueva ronda de negociaciones de la Comisión de Demarcación de Límites de Sudán y Sudán del Sur, encargada de definir las fronteras de cinco áreas en disputa, bajo los auspicios de la Unión Africana.

Sudán y Sudán del Sur avanzaron en la normalización de las relaciones diplomáticas así como en los asuntos de delimitación fronterizas entre los Estados

Por otro lado, en lo relativo a la **situación de Abyei**, durante el año se relanzó el proceso político sobre su estatuto definitivo, así como de otras zonas fronterizas. Un avance significativo fue el nombramiento de ambas partes de sus respectivos administradores de la Zona Administrativa Especial de Abyei –el teniente general Kuol Diem Kuol, por parte de Sudán, y Gumaa Dawood Musa Hamdan, por parte de Sudán del Sur–. Esta era la primera vez que Abyei tenía dos administradores principales. El Consejo de Seguridad de la ONU, en su informe S/2020/1019 relativo a la situación de Abyei, emitido el 15 de octubre de 2020, dio cuenta del mejoramiento de las relaciones bilaterales entre Sudán y Sudán del Sur. El 12 de noviembre el Consejo de Seguridad extendió el mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) hasta mayo de 2021, manteniendo el despliegue autorizado máximo de 3.550 soldados y 640 policías.

En cuanto a los **acontecimientos negativos** del año cabe resaltar el aumento de la inestabilidad en la región de Abyei durante el primer semestre debido a enfrentamientos armados entre miembros de las comunidades misseriya y pastores de las comunidades dinka. En el mes de enero se registró un ataque perpetrado por miembros de comunidades misseriya en Abyei, que dejó un balance de 32 personas muertas. Este hecho generó tensiones y motivó que los dos países firmaran, el 19 de febrero, un protocolo de control de armas en los respectivos puestos de control fronterizos. En abril, nuevamente se registraron enfrentamientos entre pastores dinka y misseriya nómadas dejando al menos seis muertos. Debido al deterioro de la situación de seguridad en Abyei, los Gobiernos de Sudán y Sudán del Sur acordaron el 30 de abril cooperar para poner fin a la violencia. Posteriormente, el 24 de junio la UNISFA reportó un ataque a un vehículo de la misión por parte de agentes armados sin identificar, violando el alto el fuego. Durante el año al menos se reportaron cuatro ataques contra personal de la UNISFA. La Misión de la ONU mantuvo durante diferentes momentos del año reuniones con las autoridades dinka y misseriya, así como con las autoridades de la región, para tratar de impulsar un proceso de paz a nivel local. Sin embargo, discrepancias entre las partes, el mantenimiento de episodios esporádicos violentos, así como las medidas de mitigación de los efectos de la COVID-19, obstaculizaron la reanudación del diálogo.

Género, paz y seguridad

La UNISFA informó de diversos resultados positivos durante el año en lo relativo a la aplicación de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Por un lado destacó el llamamiento a la participación de las mujeres en los procesos de paz realizado por el copresidente designado por Sudán del Sur del Comité Conjunto de Supervisión de Abyei en abril. Por otro, y tras el llamamiento al alto el fuego mundial realizado por el secretario general de la ONU, el 12 de mayo, la UNISFA se sumó al llamamiento en colaboración con la Asociación de Mujeres de Abyei, pertenecientes a la comunidad dinka, emitiendo la asociación un comunicado de prensa en el que exhortaba a todos los grupos armados a realizar un alto el fuego.

Magreb - Norte de África

Libia	
Actores negociadores	Consejo Presidencial y Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), Cámara de Representantes (CdR), Congreso General Nacional (CGN), LNA o ALAF
Terceras partes	Cuarteto (ONU, Liga Árabe, UA, UE), Alemania, Francia, Italia, Rusia, Turquía, Egipto, Marruecos, Túnez, Holanda y Suiza, entre otros países; Centro para el Diálogo Humanitario
Acuerdos relevantes	Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat (2015)

Síntesis:
Después de la caída del régimen de Muamar Gaddafi en 2011, Libia ha vivido un proceso de transición con múltiples desafíos políticos, económicos, sociales, institucionales y de seguridad, en un contexto caracterizado por la presencia de numerosos actores armados. Desde 2014, el país norteafricano ha sido escenario de una creciente violencia y convulsión política, que derivó en la conformación de dos grandes polos de poder. Ante esta evolución se han activado iniciativas de mediación lideradas por la ONU que han intentado buscar una salida a la crisis en un proceso no exento de obstáculos debido a las disputas de legitimidad, la diversidad de actores implicados, los múltiples intereses en juego y el persistente clima de violencia en el país, entre otros factores. A finales de 2015, bajo los auspicios de la ONU, se firmó el Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat, en medio de un clima de persistentes divisiones y escepticismo por las previsibles dificultades para su implementación. En octubre de 2017, Naciones Unidas presentó un nuevo plan para reactivar la transición política y facilitar la implementación del Acuerdo Político de Libia.

Los intentos por promover una salida negociada al conflicto en Libia continuaron enfrentando dificultades a lo largo de 2020, en parte como consecuencia de la creciente implicación de actores regionales e internacionales en la contienda –actores que intentaban incidir en las negociaciones mientras, paralelamente, continuaban suministrando armas a uno u otro bando, en abierto desafío al embargo de armas impuesto por la ONU. No fue hasta la segunda mitad del año que se produjeron algunos avances, aunque al finalizar 2020 persistían múltiples dudas sobre la evolución del proceso. **El año se inició en medio de los intentos –sin éxito– de Turquía y Rusia por favorecer un alto el fuego**. Ello, en un contexto de intensificación de las hostilidades tras el lanzamiento en abril de 2019 de una campaña sobre Trípoli por parte de las fuerzas del LNA (o ALAF) de Khalifa Haftar, hombre fuerte del este del país, contra el GNA, gobierno internacionalmente reconocido con sede en la capital libia. La intervención de Ankara y Moscú fue interpretada por algunos observadores como un intento por establecer un canal de negociación paralelo similar al denominado "proceso de Astaná" en marcha para el conflicto en Siria, donde también se ubican en bandos enfrentados. Rusia, que apoya a las fuerzas de Haftar, y Turquía, que respalda al GNA –de hecho, a principios de enero Ankara aprobó formalmente el envío de tropas a Libia– consiguieron una suspensión de los ataques aéreos y una reducción de las hostilidades durante unos días y promovieron una reunión entre Haftar y el primer ministro del GNA, Fayez Serraj, en Moscú. Sin embargo, el encuentro no desembocó en el acuerdo de siete puntos esbozado, rechazado por Haftar, cuyas fuerzas iniciaron también un bloqueo petrolero.

En este escenario, **el 19 de enero se celebró la varias veces postergada Conferencia de Berlín sobre Libia**. Las consultas del conocido como "proceso de Berlín" se habían activado en el semestre previo y se enmarcaban en la iniciativa de tres pasos propuesta por el enviado especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, a mediados de 2019. Esta incluía un cese el fuego, una reunión internacional de terceros países implicados en la crisis libia para garantizar un embargo de armas efectivo y un diálogo intra-libio en tres vías o "tracks": militar, política y económica. La cumbre en Berlín reunió a 12 países –EEUU, Reino Unido, Francia, China, Rusia, Italia, Alemania, Turquía, Egipto, EAU, Argelia y República del Congo–, y a representantes de la ONU, la UE, la Liga Árabe y la UA, pero no directamente a las partes libias protagonistas del conflicto. La conferencia –que por su composición y dinámicas subyacentes alentó comparaciones con la reunión que en 1885 decidió el reparto de África[26]– desembocó en una declaración de 55 puntos en la que se insistió en el llamamiento a un cese el fuego, se renovó el compromiso con el embargo de armas y se explicitó el apoyo a un proceso de mediación liderado por la ONU y al Acuerdo Político de Libia de 2015 como marco de referencia.[27] El componente militar, conocido como la Comisión Militar Conjunta 5+5 –integrada por cinco representantes de cada uno de los bandos libios– mantuvo su primera reunión en Ginebra a comienzos de febrero. El componente político inició sus reuniones el 26 de febrero también en la capital suiza, mientras que el económico celebró su primer encuentro en Túnez. La Conferencia de Berlín también derivó en el establecimiento de un Comité Internacional de seguimiento del proceso, con comisiones específicas para supervisar la evolución de diferentes temáticas (incluyendo una sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario).

Aunque los resultados de la Conferencia de Berlín fueron ratificados en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU –2510, aprobada el 12 de febrero–, el proceso continuó enfrentando numerosos obstáculos en los meses siguientes, en los que continuaron las violaciones al embargo y el apoyo foráneo a las partes. De hecho, **las hostilidades no se frenaron sino que se intensificaron a pesar de la expansión de la COVID-19 y del llamamiento del secretario general de la ONU a un cese el fuego globa**l que permitiera focalizar los esfuerzos en la respuesta a la pandemia.[28] En este contexto, se produjo la renuncia del enviado especial de la ONU para Libia, Ghassam Salamé. Evidenciando su frustración, el diplomático libanés atribuyó su dimisión a la hipocresía de ciertos miembros del Consejo de Seguridad a los que acusó de torpedear sus esfuerzos de mediación. La estadounidense Stephanie Williams se mantuvo como enviada especial y jefa de la UNSMIL "en funciones", ante las diferencias en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU para designar a un sucesor de Salamé (en diciembre se

26. Ruth Ferrero, "La Cumbre de Berlín o la escenificación de un nuevo orden westfaliano", *El Periódico*, 21 de enero de 2020.
27. UNSMIL, Berlin International Conference on Libya: Conference outcomes, Operational Paper, 19 de enero de 2020.
28. Para más información sobre la evolución del conflicto armado en Libia véase Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2021.

anunció el nombramiento en el cargo de Nickolay Mladenov, ex enviado especial para Oriente Medio, pero el diplomático búgaro declinó días después y el cargo permanecía vacante al finalizar el año).

A finales de abril, en una declaración televisada, Haftar anunció que aceptaba el "mandato popular" de abandonar el acuerdo político promovido por la ONU en 2015 y que sus fuerzas asumirían el control de las instituciones del país. El movimiento generó divisiones en su propio bando y acusaciones de golpe por parte de sus adversarios. También fue interpretado como una maniobra para prevenir posibles negociaciones entre el gobierno de Trípoli y la Cámara de Representantes basada en Tobruk, y su líder Aghela Saleh, aliado pero no siempre alineado completamente con las posiciones de Haftar.[29] En los meses siguientes, en línea con la evolución del conflicto, el repliegue de Haftar de la capital libia, el avance de las fuerzas del GNA y la oscilación de las hostilidades desde Trípoli hacia Sirte, algunas iniciativas intentaron prevenir una mayor escalada de violencia en esta zona del centro del país. En junio Turquía y Rusia volvieron a hacer una propuesta que no derivó en un cese el fuego. Paralelamente, Egipto –otro apoyo clave de Haftar y que alertó que Sirte constituía una línea roja– delineó una hoja de ruta para negociaciones políticas que fue rechazada por el GNA y Turquía. No fue hasta dos meses después que comenzaron a observarse movimientos que condujeron a una reducción de los enfrentamientos. El 21 de agosto el GNA emitió una declaración en la que anunció un cese el fuego unilateral y en la que llamaba a celebrar elecciones en 2021. No hubo entonces una respuesta directa de Haftar, pero uno de sus aliados, el líder de la Cámara de Representantes con sede en Tobruk (este) Aquila Saleh, también anunció una tregua. La declaración coordinada por parte de los bandos rivales fue interpretada como un intento por dibujar un nuevo escenario.

Al finalizar el año las partes en conflicto en Libia suscribieron un acuerdo de cese el fuego y las negociaciones políticas intentaban establecer un gobierno de transición, mientras persistían las dudas sobre la evolución general del proceso

El 23 de octubre las partes formalizaron un acuerdo de cese el fuego permanente. El pacto se oficializó tras varios días de reunión en Ginebra –la cuarta ronda, pero la primera presencial– de la Comisión Militar Conjunta 5+5, en la que solo participaron hombres –los 10 delegados por los bandos libios–, con excepción de la enviada especial de la ONU en funciones. Análisis destacaron que para la firma de la tregua fueron claves dos encuentros previos de representantes de los bandos rivales a finales de septiembre: uno celebrado en Sochi, Rusia, para poner fin al bloqueo petrolero, y una reunión entre altos cargos militares en el balneario egipcio de Hurghada, facilitado por UNSMIL.[30] El acuerdo de cese el fuego contempla que en un plazo máximo de tres meses todas las unidades militares y grupos armados se replieguen desde las líneas de batalla a sus bases y que todos los mercenarios y combatientes extranjeros abandonen el territorio y los espacios aéreo y marítimo de Libia. Asimismo, se prevé la suspensión de los programas de entrenamiento militares hasta la formación de un nuevo gobierno. Adicionalmente, se contempla el inicio de la desmovilización de grupos armados y algunas medidas de confianza. A principios de noviembre el 5+5 mantuvo su primera reunión en Libia, en la localidad de Ghadames (oeste). Algunos análisis subrayaron entonces que la ambigüedad en el redactado del acuerdo y la falta de concreción en algunos puntos podrían favorecer interpretaciones dispares y dificultar su implementación. Otros apuntaron que las potencias foráneas difícilmente se replegarían sin obtener dividendos por su implicación militar.

Paralelamente, las negociaciones de carácter político –conocido como LPDF por las siglas en inglés de Libyan Political Dialogue Forum– tuvieron su cita clave entre el 9 y 15 de noviembre en Túnez. En ella se diseñó una hoja de ruta que prevé la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales el 24 de diciembre de 2021 –fecha del 70º aniversario de la república libia. Esta reunión estuvo precedida por otros espacios de diálogo, entre ellos una reunión de actores clave libios en Montreux (Suiza), facilitada por el Centre for Humanitarian Dialogue y con presencia de UNSMIL, en septiembre. Marruecos también promovió espacios de diálogo intra-libios, incluyendo una reunión de delegaciones de la Cámara de Representantes y del Alto Consejo de Estado en Bouznika, en octubre; o un encuentro de más de 120 parlamentarios libios en Tánger, a finales de noviembre, donde tras cinco días de debates se comprometieron a poner fin a los discursos de odio que minan las instituciones libias.

Al finalizar el año, sin embargo, persistían las dudas y el escepticismo sobre el proceso en general. La representante especial para Libia en funciones anunció que el LPDF no había conseguido acordar el mecanismo para designar un gobierno de transición para dirigir el país hasta la celebración de elecciones a pesar de la celebración de seis rondas virtuales desde la cita de noviembre en Túnez. Según trascendió, persistían diferencias sobre cómo elegir a los tres miembros del Consejo Presidencial y al primer ministro. Pese a ello, la ONU decidió activar igualmente en diciembre un comité para definir el marco legal para los comicios de 2021. En el plano económico, las controversias más complejas giraban en torno a cómo canalizar los ingresos procedentes de las ventas de petróleo. En

29. International Crisis Group, *Interpreting Haftar's Gambit in Libya*, Middle East & North Africa, 4 de mayo de 2020.
30. International Crisis Group, *Fleshing Out the Libya Ceasefire Agreement*, Crisis Group Middle East and North Africa Briefing No.80, 4 noviembre de 2020.

medio de acusaciones cruzadas de vulneraciones al acuerdo de tregua y denuncias sobre el refuerzo militar a ambos bandos, al finalizar el año -el 29 de diciembre- el secretario general de la ONU propuso establecer un grupo de supervisión internacional para apoyar el cumplimiento del cese el fuego. Algunos análisis sugerían que a pesar de las señales negativas, las potencias involucradas en la contienda no parecían tener ánimo de reanudar las hostilidades y que algunas dinámicas regionales –como la distensión entre Qatar y otros países árabes– podían reducir las perspectivas de Libia como escenario de confrontación indirecta de estos actores.[31]

Género, paz y seguridad

Las 17 mujeres libias del total de 75 participantes en el diálogo político LPDF o "track" político realizaron una declaración conjunta a mediados de noviembre en la que subrayaron la importancia de la implicación de las mujeres en el proceso de paz, diálogo, reconstrucción del Estado y reconciliación del país. Reivindicando la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad y los resultados de consultas previas facilitadas por UNSMIL, las participantes manifestaron su adhesión a una serie de principios e hicieron recomendaciones para el proceso. Entre ellas, garantizar una representación efectiva de mujeres en la conformación de la autoridad ejecutiva, no inferior a un 30%; asegurar el respeto a los derechos de las mujeres y su participación en la vida política; demandar que uno de los dos puestos de viceprimer ministro sea para una mujer; adoptar medidas para combatir la discriminación a las mujeres, incluyendo a las supervivientes de violencias derivadas del conflicto; ofrecer una protección especial para mujeres políticas y activistas; favorecer una representación justa de todos los componentes de la sociedad, incluyendo un mínimo de 20% de jóvenes.[32]

La hoja de ruta aprobada por el LPDF incluyó un compromiso para la promoción y protección de los derechos humanos y para la igualdad de género. Adicionalmente, algunos principios clave para una paz sostenible desarrollados por representantes de la sociedad civil fueron "anexados" a la hoja de ruta. Estos principios fueron identificados en dos sesiones en octubre y noviembre facilitadas por el grupo comité de seguimiento internacional encargado de los temas de derechos humanos y DIH –coordinado por Holanda, Suiza y la UNSMIL– y entre ellos se incluyen las garantías de igualdad de derechos para las mujeres, la participación equitativa y significativa de mujeres en todos los espacios conducentes a la paz y que cualquier acuerdo de paz tenga en cuenta los impactos específicos de género antes de su adopción y un análisis de género durante la implementación. En diciembre, ONU Mujeres alertó sobre amenazas a algunas de las mujeres participantes en el LPDF y demandó garantías de protección para las participantes en este espacio y en otros ámbitos de debate político.

Paralelamente, organizaciones de mujeres libias como Together We Build It subrayaron la importancia de que las referencias a la participación de las mujeres y la promoción de la igualdad de género en las resoluciones de la ONU sobre Libia sean más concretas y favorezcan mecanismos de rendición de cuentas. Activistas de la Libyan Women's Platform for Peace (LWPP) también alertaron sobre una falta de confianza en las capacidades de las mujeres por parte de actores políticos y subrayaron que el empoderamiento de las mujeres debe ir en paralelo a un desempoderamiento de los hombres de la guerra. Grupos de mujeres evidenciaron la persistencia de las violencias contra las mujeres pese al acuerdo de cese el fuego, en especial tras el asesinato de la activista contra la corrupción y promotora de derechos humanos Hanan Elbarassi.

Marruecos – Sáhara Occidental	
Actores negociadores	Marruecos, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO)
Terceras partes	ONU, Argelia y Mauritania, Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia)
Acuerdos relevantes	Acuerdo de cese el fuego (1991)

Síntesis:
Los intentos de mediación y búsqueda de una salida negociada al conflicto del Sáhara Occidental derivaron en un acuerdo de cese el fuego en 1991. Desde entonces, y pese a la existencia de un marco formal de negociaciones bajo los auspicios de la ONU, el proceso de paz sobre el Sáhara Occidental no ha fructificado. Las sucesivas propuestas y numerosas rondas de negociaciones no han suscitado un acuerdo entre las partes, que mantienen sus respectivas líneas rojas: Marruecos insiste en su reclamo sobre el territorio y sólo está dispuesto a admitir un estatus de autonomía, mientras que el Frente POLISARIO reivindica la necesidad de llevar a cabo un referéndum que incluya la opción de independencia. Las negociaciones sobre el Sáhara Occidental –reconocido como un territorio pendiente de descolonizar– se han visto determinadas por la asimetría de los actores en disputa, la incapacidad de la ONU para poner en marcha una consulta sobre el futuro del territorio, la rivalidad regional entre Marruecos y Argelia –apoyo clave para el POLISARIO–, y por el respaldo a Rabat por parte de actores internacionales clave, como EEUU o Francia, lo que ha determinado, en la práctica, una prevalencia de las tesis marroquíes en la aproximación al conflicto.

El caso del Sáhara Occidental continuó caracterizándose por un crónico bloqueo y parálisis de la vía diplomática para abordar y resolver la disputa, situación que favoreció una escalada de la tensión hacia finales de

31. International Crisis Group, *Foreign Actors Drive Military Build-up amid Deadlocked Political Talks,* Crisis Group Libya Update #2, 24 de diciembre de 2020.
32. UNSMIL, Statement of the Libyan Women Participating in the Libyan Political Dialogue Forum, 15 de noviembre de 2020.
33. Véase el resumen sobre la tensión en el Sáhara Occidental en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* Barcelona: Icaria, 2021.

año.[33] Mientras que Marruecos persistió en defender que su plan de autonomía era la única vía viable para avanzar en una solución al conflicto, el Frente POLISARIO insistió en denunciar la incapacidad de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para cumplir su mandato –que incluye la celebración de una consulta, como su nombre indica– y en alertar que estaba reconsiderando su participación en el proceso de paz de la ONU. En este sentido, cabe resaltar que **el puesto de enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental permaneció vacante durante todo 2020 y que el propio António Guterres reconoció en septiembre, en su informe anual sobre el Sáhara Occidental, que existía una "pausa" en el proceso político derivada de la renuncia, en mayo de 2019, de Horst Köhler**. En su momento, el expresidente alemán consiguió activar un tímido proceso de mesas redondas entre Marruecos, el Frente POLISARIO, Argelia y Mauritania que celebró dos rondas –en diciembre de 2018 y marzo de 2019– y quedó totalmente paralizado tras la dimisión de Köhler, atribuida a razones de salud.

El informe anual del secretario general alertó también sobre crecientes vulneraciones a las disposiciones relativas al cese el fuego vigente desde 1991, en particular al este del muro, en el período entre octubre de 2019 y agosto de 2020. En este contexto, Guterres expresó su preocupación por el alejamiento de las partes, por la persistente falta de confianza entre ellas y por la multiplicación de gestos que podrían minar el alto el fuego y ser fuente de tensión, en detrimento de una solución negociada. Así, hizo un llamamiento a que Marruecos y el Frente POLISARIO participaran de buena fe y sin condiciones en el proceso político tan pronto nombrara un enviado personal y subrayó la necesidad de encontrar una solución "justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental". En octubre, poco antes de la renovación del mandato de la MINURSO, el jefe de la misión volvió a advertir al Consejo de Seguridad de la ONU sobre un incremento de violaciones al acuerdo militar número 1, que regula la tregua.

El caso del Sáhara Occidental continuó caracterizándose por un crónico bloqueo y parálisis de la vía diplomática para abordar y resolver la disputa, situación que favoreció una escalada de la tensión a finales de año

En este escenario se produjo una escalada de la tensión. El epicentro fue Guerguerat, una zona que ya había sido objeto de disputas en los últimos años y que a lo largo de 2020 también fue objeto de manifestaciones y barricadas saharauis ante lo que el Frente POLISARIO ha denunciado reiteradamente como un paso ilícito o brecha ilegal. El 21 de octubre una cincuentena de saharauis bloqueó el tráfico en esta zona, ubicada entre Mauritania y el área del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos, y se manifestaron para pedir que el Consejo de Seguridad de la ONU –que por esos días discutía la renovación del mandato de la MINURSO– cumpliera con el cometido de celebrar un referéndum de autodeterminación. En línea con lo ocurrido en los últimos años, la resolución 2548 fue aprobada el 30 de octubre con un redactado favorable a las tesis marroquíes: sin una mención explícita a la consulta y enfatizando la necesidad de una "solución política realista, practicable y duradera" a la cuestión del Sáhara Occidental. La acción de protesta saharaui en Guerguerat persistió y el 13 de noviembre fuerzas marroquíes accedieron a esta zona en teoría desmilitarizada de separación (buffer zone) para dispersarla y restablecer el tráfico de mercancías. Ante esta incursión, el Frente POLISARIO dio por finalizado el alto el fuego y declaró el estado de guerra. Marruecos evitó usar el término "guerra" y aseguró que se mantenía comprometido con el cese el fuego, pero advirtió sobre una respuesta contundente en caso de amenaza a su seguridad.

Diversos análisis subrayaron que con esta aproximación el Frente POLISARIO pretendía alterar el estatus quo, dar respuesta a la frustración de generaciones de jóvenes en los campos de refugiados que llevan décadas esperando una solución política y desafiar la estrategia de silenciamiento e invisibilización del conflicto impuesta por Marruecos. El secretario general de la ONU lamentó el fracaso de los esfuerzos de su organización para evitar una escalada, expresó su preocupación, llamó a evitar el colapso del cese el fuego y subrayó su determinación a remover los obstáculos para reactivar el proceso político. Pese a sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental, España mantuvo una posición discreta, limitada formalmente a respaldar las iniciativas de la ONU para garantizar la tregua.

Desde mediados de noviembre el Frente POLISARIO informó de movilización de fuerzas, ataques periódicos a bases marroquíes y anunció bajas en el bando rival –no confirmadas por Rabat–, sin comunicar bajas en sus filas. Otras fuentes apuntaron intercambios de fuego de baja intensidad en puntos de la barrera de 2.700 kilómetros construida por Marruecos. Paralelamente, se informó de un aumento de los hostigamientos y represión en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, incluyendo redadas, detenciones, agresiones, aumento de la vigilancia y supresión de manifestaciones en localidades como El Aaiún, Smara, Dakhla y Boujdour. La situación general fue compleja de valorar por la falta de acceso de observadores independientes. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch subrayaron que aunque no se había informado de víctimas civiles en las hostilidades, los hechos reforzaban la necesidad de un mecanismo efectivo de monitoreo de la situación de derechos humanos, incluyendo competencias en este ámbito por parte de MINURSO, continuamente rechazadas por Rabat.

En este contexto, el 10 de diciembre **EEUU emitió una declaración en la que "proclama" la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, posición que el Gobierno de Donald Trump adoptó a cambio de que Rabat "normalizara" relaciones diplomáticas con Israel** y que rompe con la posición tradicional de Washington en esta materia. De hecho, si bien otros países se han mostrado favorables a un estatus futuro del Sáhara Occidental como un territorio autónomo dentro de Marruecos, la decisión de Trump convirtió a EEUU en el primer país en reconocer la anexión unilateral marroquí del territorio. El posicionamiento estadounidense destaca su respaldo a la propuesta de autonomía marroquí como única base para una solución "seria, creíble, realista y duradera" de la disputa, pero añade que EEUU "reconoce la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara Occidental" y subraya que "un Estado saharaui independiente no es una opción realista para resolver el conflicto".[34] El Frente POLISARIO condenó el anuncio, subrayando que violaba la legitimidad de resoluciones internacionales y obstruía los esfuerzos por alcanzar una solución. EEUU anunció que abriría un consulado en El Aaiún. Emiratos Árabes Unidos (EAU) –que también firmó un acuerdo con Israel en agosto a instancias de EEUU– abrió una oficina diplomática en esta misma ciudad en noviembre e informaciones de prensa anunciaron que Bahrein y Jordania –otros dos aliados de Washington en la región– seguirían este camino. Previamente, a lo largo del año, diversos países africanos –Burundi, Comoras, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabón, Gambia, Guinea, Liberia, RCA y Santo Tomé y Príncipe– también decidieron inaugurar "consultados generales" en El Aaiún o Dakhla, en una acciones denunciadas por el Frente POLISARIO por atentar contra el estatus de territorio no autónomo del Sáhara Occidental.

Aunque la medida de Trump fue presentada como un éxito y refuerzo a la posición marroquí, no se preveían cambios en la aproximación de la ONU,la UA o la UE y tampoco estaba clara la postura que asumiría la nueva administración estadounidense a este respecto a partir de 2021. Al finalizar 2020, a instancias de Alemania, se celebró una reunión a puerta cerrada –en formato de consultas por videoconferencia– de los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la evolución de los acontecimientos más recientes. Según trascendió, en el encuentro participaron el asistente del secretario general para África, Bintou Keita, y el representante especial y jefe de la MINURSO, Colin Stewart. Se esperaba que miembros del Consejo insistieran en la relevancia de una rápida designación de un nuevo enviado personal para evitar un deterioro de la situación y reforzar la mediación de la ONU.

Género, paz y seguridad

Ante la deriva de los acontecimientos en 2020, algunos sectores saharauis, incluyendo feministas y pacifistas saharauis, apelaron a las autoridades españolas para que asumieran su responsabilidad en el proceso descolonización del Sáhara y mostraran una mayor iniciativa política ante la reciente encrucijada. Asimismo, insistieron en la necesidad de una salida que no pase por la violencia y llamaron al Frente POLISARIO a una desescalada por las graves consecuencias que la reanudación del conflicto armado puede tener para la población saharaui. Paralelamente, activistas saharauis continuaron sus movilizaciones y denuncias de la represión marroquí en el territorio del Sáhara Occidental controlado por Rabat.

34. White House, *Proclamation on Recognizing The Sovereignty Of The Kingdom Of Morocco Over The Western Sahara*, 10 de diciembre de 2020.